

ENT 1: Ahora está en el INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Sí, ganó un concurso. Bueno, pues agradecerle, doctor TEST,

de verdad que para nosotros, para la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1, ¡aaagh!

ENT 2: Se nos fue.

ENT 1: Se nos fue, se nos fue...

Esperemos que vuelve.

ENT 2: Se nos fueee, no sé por qué

[cantando]. ¡Ay! ¿O sea que todo lo que cante queda grabado? ¡Ay, sagrado rostro!

ENT 1: [risas] Sí. ¿Listo?

TEST: Aquí estoy. Sí, me excusan que tuve aquí un inconveniente técnico y me salí por error.

ENT 1: Tranquilo.

TEST: Iba a activar el micrófono...

creo que me salí por error.

ENT 1: Bueno, no, tranquilo. Pues

como le comentaba, súper felices de poder contar con su presencia, con sus conocimientos, con su proceso de investigación en este espacio de la ORGANIZACIN PÚBLICA 1. Nosotros hacemos parte, ENT 2 y yo hacemos parte del núcleo de papel y responsabilidades del Estado en el conflicto armado. Este núcleo además hace parte de un equipo de investigación más grande que está trabajando todo el tema de régimen político, democracia y negociaciones de paz. Entonces tenemos muchísimos temas, pero el centro de lo que veníamos analizando en el primer semestre del 2020, fue este tema de los Estados de sitio, el tema de las políticas de defensa y seguridad del Estado y un poco cómo había funcionado, cómo estaba Colombia políticamente durante la Constitución del 86, ¿no? Para poder entender el conflicto armado, porque creo que esa es una de las cosas que nos debíamos en este país para poder entender.

Pues entonces hoy ----- de 2020 tenemos al doctor TEST, yo le voy a hacer doctor, antes de comenzar, pues como las preguntas del consentimiento informado que sumercé ya posee, que ya leyó, para que quede formalmente la vinculación de este ejercicio de entrevistas con la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1. Para la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 el centro de la información y de los trabajos va a ser los testimonios y por eso se ha generado todo este tema de las entrevistas y de ser muy prudentes con la información y de poder protegerla, ¿no? Porque pues muchas de las cosas que nos dicen las personas que participan en la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 pues son muy delicadas, muy importantes. Entonces el objetivo es hacer una protección total de esta información, que esta información después de que termine la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1, que acaba su mandato el año entrante, pues que pueda ser resguardada de la debida forma y que toda esta información que nos da la historia de este país, pues que realmente se proteja para las futuras generaciones. Entonces esa es parte central de que la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 haya instaurado este consentimiento informado y de que la gente sepa que y

esté tranquila de que todo lo que dice acá pues estará totalmente resguardado bajo toda la reserva necesaria del caso, pues. En ese orden de ideas, entoes yo voy a pasar a leer las preguntas de rigor, formales, sobre el consentimiento expreso. [Consentimiento informado03:37- 05:02]

Muchísimas gracias, ahora sí un poco como ya comentarle pues, lo que en algún momento le venía diciendo, nosotros (tanto ENT 1, que está trabajando ahora el tema de políticas de defensa y seguridad, como en mi caso que trabajé toda la parte histórica: orígenes del conflicto armado) ha sido una intriga el tema de las decisiones de la Corte Suprema, pensando en el papel y responsabilidades del Estado. Entonces en este primer momento nos gustaría que sumercé hiciera una breve presentación de su experiencia, de quién es TEST y empezáramos a mirar y a caracterizar quiénes eran la Corte Suprema y el Consejo de Estado en ese pasado del siglo XX y de la Constitución del 86 en Colombia.

TEST: Bueno, muchas gracias, un gusto

ENT 1, un gusto ENT 2 conversar con ustedes y conversar con la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 sobre estos temas que creo que son de interés público y además de interés intergeneracional para los que vienen también. Pues yo soy ----- hice maestría en ----- en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2. Soy -- de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 3, soy caucano, allá hice mi pregrado y estudié la maestría en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2, el doctorado en INSTITUCIÓN EDUCATIVA 4 y durante buena parte de mi vida me he dedicado al derecho constitucional, me dediqué al derecho constitucional inicialmente. Después empecé a incursionar en la historia del derecho, en la historia constitucional y terminé trabajando una historia de la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 2 que inicialmente iba a ser mi historia del control constitucional, es decir, de la defensa judicial de la Constitución, pero de tanto que incursioné en la historia del control constitucional, terminé metiéndome con una historia un poco más institucional, pero en clave política de esa corte. De ahí quedaron esos dos tomos de la historia de la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 2 que estaba revisándolos ahora al medio día, por aquí y ahora me tocó revisarlos, porque ya me estoy olvidando de las fechas y tanto dato.

Entonces esa es como mi obra central de trabajo, me abrió pues como una agenda de investigación en donde hace poco, le comentaba yo a ENT 1 que este año hace un mes en Chile se publicó un trabajo sobre la ley heroica (y yo no lo había hecho con esa intención, pero es más una historia social, terminó siendo una historia social del derecho). Pero lo mío ha sido más como una historia, como dice un colega mexicano: "en esa zona gris donde uno cree que puede entender un poquito de historia, hacer historiografía, un poquito de política y un poquito de constitucional y entonces ir como intentando mapiar una historia política de la Corte Suprema, del control constitucional.

Hace poco también publiqué en una revista que se llama ----- que es chilena, producto digamos de estas investigaciones, tiene un nombre así, algo así como "-----", una cosa así, creo que se llama

así. Entonces lo que muestra es, arranca en ese episodio de 26 al 30, que es la parte más dura de la lucha antibolchevique en el gobierno de Abadía, mostrando las herramientas legales que se usan para reprimir, aparentemente a los bolcheviques en Colombia, pero realmente está centrado es en el movimiento obrero que empieza a movilizarse en ese momento. Luego, muestra un poco las herramientas jurídicas que utiliza el gobierno de Rojas Pinilla, la provisión constitucional del comunismo por la ENAC en el 54, o como el temor de la Guerra fría, de la expansión soviética y luego se centra en el Estatuto de seguridad del 78 de Turbay, intentando juntar esos tres momentos, diferenciándolos, por supuesto, pero mostrando cómo hay unos relatos de lucha anticomunista que termina arrasando en general a los opositores. Es algo así como mostrar cómo en general terminan es barriéndose a los disidentes y a las disidentes, con el argumento de la persecución comunista, pues que ahora estamos un poco con ese espejo retrovisor en estos últimos dos años de estos nuevos calificativos a donde, digamos, hay una mezcla de defensa del orden público, de la seguridad, anti-subversión,

pero también anti-disidencias. Y eso parece, entonces con esto, por eso arranco por aquí, terminé haciendo historia de la Corte, terminé metiéndome en estos temas por los lados y he producido ahí un par de trabajos en esa línea y un colega me dijo que por qué no me hacía una historia jurídica, una historia del derecho contra el comunismo, pero digamos más gruesa del siglo XX, mostrando pues la dificultad que hay de poder determinar cuál es el objetivo, la finalidad de cada una de estas herramientas legales y cómo terminan convirtiéndose en herramientas para reprimir a ciertos grupos a veces de manera deliberada, a veces por el poder que se le da a la fuerza pública, en fin.

Pero entonces el grueso de mi trabajo

ha sido más como una historia política del control constitucional y allí, algo que yo digo pues en los comentarios, en los eventos en los que participo (que los virtuales se han vuelto bastante comunes en estos días) es que digamos lo que yo encontré en mis trabajos, sobre todo en este de la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 2 y de lo que he venido haciendo en estos últimos 15 años, es que la historia política del país se puede contar desde la historia constitucional, desde el control constitucional. Es decir, que uno puede contar la historia política desde una ventana que es la manera como la justicia leyó esa historia política, pero también la manera como la justicia estuvo metida en esa historia política, la escribió esa historia política. Y que la historia política sirve para contar mejor esos fallos del control constitucional, es decir, que uno no entiende estas herramientas jurídicas contra el comunismo, como he llamado yo en los años 20, no es simplemente la discusión entre la Constitución del 86 y la vulneración de derechos en esas normas, pues es una discusión jurídica muy interesante, pero cuando uno conoce la historia política y se da cuenta quién era Ignacio Rengifo, quién era Abadía, qué era lo que estaba en juego, cómo estaba la hegemonía conservadora intentando sobrevivir, cómo los liberales se estaban reinventando

un poco para, cambiando su agenda y pues entiende de mejor manera esas herramientas jurídicas con esa historia política.

Entonces en general, la preocupación

mía, digamos en estos años de investigación, es mostrar esa interdependencia entre derecho y política, para hacer ese tipo de historia del derecho que propongo, eso sería digamos que, aquí me extendí un poquito más en la presentación, pero esa es como la mirada que he querido darle. Y la Constitución del 86, pues gran parte de mi trabajo ha sido ese, sobre la Constitución del 86. Ahí debo decir que no tanto la del 86; sino la del 86 con todas sus reformas, porque la reforma de 1910 es otra Constitución del 86. La reforma del 36 le cambia la cara, la del 68 bueno, la retoca, pero el caso por ejemplo de los decretos de Estado de sitio, la suspensión de las leyes, el uso del Estado de sitio pues le da distintas caras a la Constitución del 86 a lo largo del siglo XX, que creo que es lo que a veces uno pierde como de vista un poco, ¿no? Entonces es como si uno todavía tuviera a Núñez y a Caro, como si ellos hubieran sido como los grandes artífices de todo el siglo XX colombiano y claro, la Constitución del 86 sí era cierto, autoritaria, etcétera, pero los usos del Estado de sitio durante el siglo XX pues la dan distintos colores a esa Constitución del 86. Y creo que entonces cuando uno ve cada periodo e intenta mostrar o intenta entender cada período, pues cobra un sentido diferente ese ideario de la Constitución del 86 y de la Regeneración, que a veces uno como que lo congela y lo proyecta en el tiempo. Entonces, ENT 1, me habías dicho que sobre todo...

ENT 1: Que ¿cómo podemos entender y

caracterizar a esa Corte y a ese Consejo de Estado? Porque, digamos, hoy estamos, bueno, en mi caso yo soy ----- y bueno, hice la maestría en ----- pero ENT 2 es de ----- y muy metido en el tema del enfoque de niños, niñas y adolescentes en el tema del conflicto armado. Entoes creo que poder entender cómo era la Corte, no solo para los abogados; sino cómo la vemos cuando hablábamos, sumercé me decía lo de esta historia social y política, yo decía genial porque es lo que queremos para que no solamente los abogados (que somos pocos en la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1) estemos; sino que toda la gama de personas. Entoes ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podríamos abordar en un inicio esa Corte y ese Consejo de Estado? Que son como las representaciones más grandes del Estado desde lo jurídico.

TEST: Pues en el... creo que uno de los aspectos que yo resalto del tipo de trabajo que he hecho, digamos, lo que estoy conversando aquí es mi aproximación con las investigaciones académicas, es que creo que en general la historiografía y el derecho constitucional han tendido a ver ese papel de la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 2 durante gran parte del siglo XX, o bien para los historiadores, como un asunto no tan importante, es decir, se ha preocupado más el Estado de sitio, las normas de Estado de sitio, los efectos y menos el papel de esa Corte, como si fuera un asunto menor. Y para los abogados, en general para el derecho, creo que la narrativa sobre el

papel de la Corte, en general en el siglo XX, tiende a ser un papel, una mirada muy dogmática, jurídica, de doctrina legal, es decir, de lo que hizo o no hizo la jurisprudencia, pero no el efecto que tuvo y ese diálogo con estos otros elementos. Entonces en un primer punto es que la Corte fue un actor político, yo creo que ese es un punto que, vos sabés que en la teoría jurídica más tradicional, no se acepta mucho, pero diría que las teorías críticas que hacen historia crítica del derecho hace rato pues que pujan esto y en la Ciencia Política pues ni se diga. Todo este movimiento de la, toda esta corriente de la Judice Alcoholicos, que se origina en los Estados Unidos, se encarga precisamente de estudiar la faceta política de las decisiones judiciales y las interdependencias entre derecho y política. Entoes yo diría que lo primero es entender que la Corte Suprema fue un actor político durante toda la Constitución del 86, que es lo que estamos conversando ahora, pero fue un actor político especial.

Y creo que ahí esta parte como de la clave para poder comprender en mejor medida ese papel y es que la experiencia del Congreso, de los congresos, del ejecutivo, los órganos locales, territoriales, elegidos popularmente o con elección ciudadana, este órgano, Corte Suprema en especial, pues tenía que justificar las decisiones, tenía que justificar los fallos ante una comunidad de intérpretes, que eran los juristas. Entonces ese papel de la Corte no es tan fácil de leer porque lo que siempre conversamos con colegas bogados dicen: "pero es que claramente la Corte interpretó la norma y la decisión a la que llegó era la que podía tomar en ese momento". Sí claro, como por ejemplo meter en el congelador durante cuatro años las demandas contra los decretos de Estado de sitio que se usaron para reprimir todo el movimiento en la masacre y después de la masacre de las bananeras. Meter en el congelador una demanda de inconstitucionalidad para sacarla luego, que es el uso estratégico del tiempo, por supuesto que es una faceta política de una Corte. El saber en qué momento se produce un fallo, en qué momento no se produce, declararse inhibida para fallar en temas que son de alta complejidad política, como por ejemplo la demanda contra el tratado de 1914, el tratado Urrutia-Thompson que en buena medida arregla las tensiones con Estados Unidos en la separación de Panamá. Pues claro, entoes la gente dice "se declaró inhibida porque interpretó la Constitución y no tenía la competencia". Si, sí, un momento, pero ¿qué estaba en juego? ¿Qué había ahí? Entonces la idea de que las decisiones judiciales se tienen que justificar ante esa comunidad de intérpretes, con esa comunidad de juristas, a veces oscurece ese papel político. Y probablemente, claro, una de las principales virtudes que tiene el derecho es que precisamente oculta todas estas tensiones políticas, en buena medida digamos que estabiliza lo que está allí en profunda tensión política. Entonces, por ejemplo, el uso estratégico del silencio, el uso estratégico del tiempo.

Fue un órgano político en el sentido

en que la elección de estos magistrados, la designación era algo digamos que,

en varios periodos, estuvo atado a las hegemonías. La hegemonía conservadora y la hegemonía liberal produjeron mayorías en la Corte por la forma de elección (ahora si quieren conversamos un poquito de eso). Y entonces las decisiones de la Corte que favorecían a un partido político, a un gobierno, que era mayoritario, con un Congreso mayoritario (también con la hegemonía conservadora como la liberal) producían que inmediatamente el partido en oposición y lo que podríamos llamar opinión pública, pues es bastante difícil de medir historiográficamente por falta de datos y cosas en este... la opinión pública son de pronto, si acaso las columnas de prensa de los grandes medios o de la gente que podía hacer circular periódicos, pero en general la lectura que se tenía era que los fallos de esa Corte que favorecían al partido político, a la mayoría de turno, estaban politizados. Entonces luego cuando esa minoría se convertía en mayoría, la lectura de la oposición era (creo que es otra forma de entender esas violencias y esas tensiones de las hegemonías).

A veces hablamos de hegemonías conservadora, hegemonía liberal, y no sabemos qué pasó con la Corte en esa hegemonías liberal y conservadora. Yo en ese texto intento contar que sí hubo una lectura politizada, que sí hay elementos que nos muestran que se politizó la corte, que tampoco se puede liquidar el asunto diciendo que eran unos conservadores y liberales en la Corte produciendo fallos favorables o desfavorables, que es más difícil porque uno tiende a ver los casos emblemáticos, entoes claro, uno ve el caso de la masacre de las bananeras, pero no ve las decenas de procesos que la Corte tramitaba. Probablemente en esos otros casos ordinarios, cotidianos, rutinarios, pues la Corte simplemente estaba haciendo una discusión sobre materiales jurídicos, no tenía una atención política, ni tenía una, ni podía desplegar digamos ciertas posturas ideológicas como sí se pueden apreciar en los casos más emblemáticos. No todos los días la Corte Suprema le dio vía libre a una Asamblea Constituyente como la del 91. No todos los días se produce el fallo del plebiscito del 57. Entoes uno ya, claro, uno ve esos grandes hitos, pero no ve lo del día a día. Entonces el fallo que declara inconstitucional la sobretasa de no sé qué. Eso, claro, uno dice, eso no tiene ningún lío. Hay una gran cantidad de decisiones que no salen a la superficie política, entoes claro, todo eso hace como difícil leer... Dicen en tal periodo la Corte produjo 30 sentencias, solo hubo una relacionada con las bananeras y usted me dice que era una Corte conservadora, un poco digamos, la apertura más clásica de los abogados, digamos del derecho. De 40 sentencias hubo 2 que desde la Corte se inclinó con el partido de gobierno, entonces usted no puede hablar de que sea una Corte conservadora, pero claro, parte del ejercicio es mostrar que también en otros espacios de esas sentencias no tan emblemáticas hay un despliegue de ideología.

Pero lo interesante del asunto es que esa ideología, esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión si se quiere, a veces termina, queda en las letras de las sentencias y a veces queda en los

salvamentos de voto. Por ejemplo, el decreto a alta policía en 1928: la Corte le dedica un par de párrafos a decir que es necesario darle herramientas al Gobierno Nacional para perseguir a los bolcheviques, porque la Internacional Socialista se está extendiendo por todo el mundo y que ya se sienten coletazos. E incluso llega a citar un cable del secretario de Estado de la época de Estados Unidos, el partido Kellog [DUD22:52]

que les dicen que en América Latina hay una amenaza comunista y la Corte dice: "tenemos esta información, hay una movilización y el decreto a alta policía es constitucional", lo dicta, es el decreto a alta Policía que se usa para reprimir el 1 de mayo de 1928, que según el ministro Ignacio Rengifo iba a producir una gran toma bolchevique del país. Entonces queda así de explícito, a veces aparece el conflicto, aparece la tensión política, aparece la cosmovisión, la visión, la ideología. Pero en otros casos aparece más disimulada y parte entonces del ejercicio es leer qué decía la prensa en la época, cuáles eran los otros... es decir, qué había en juego detrás de cada fallo, de cada decisión. Pero entonces esta Corte, volviendo al punto, era un actor político distinto a los demás órganos, porque como toda Corte, como todo tribunal, debía justificar sus decisiones. Entonces no es igual juzgar el papel político del Congreso en el conflicto armado o el papel político del ejecutivo, ese papel de las cortes o de la Corte Suprema a veces es más gris.

Ahora bien, sobre el Consejo de

Estado, el Consejo de Estado durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, digamos la Corte Suprema de justicia tiene doble jurisdicción, doble competencia; no solo controla las leyes, por lo constitucional; sino que también controla los decretos del Ejecutivo, los simples decretos. Este del decreto a alta Policía, por ejemplo, es un decreto común y corriente, es por decirlo de alguna manera, un decreto ordinario. Simple poder administrativo, poder ejecutivo; no es un decreto de Estado de sitio. Entonces la Corte Suprema realmente era la Corte única por varias décadas. Con la entrada del Consejo de Estado, allí el Consejo de Estado entra a tener un papel muy importante. Por ejemplo, uno de los papeles que uno a veces olvida era que por ejemplo tenía la capacidad de declarar la nulidad de la elección, incluso de magistrados de la Corte Suprema o varios procesos en los años 40, 50, en donde la Corte Suprema declaró nulos, perdón, se pronunció sobre esas nulidades. Ya en la segunda parte del siglo XX, la segunda mitad, los sesenta hacia acá, pues sí ya es mucho más conocido el Consejo, sobre todo por ese papel que tuvo en materia de responsabilidad del Estado, en reparaciones directas. Ahí yo sí creo pues que hay una época de un gran protagonismo del Consejo de Estado. Y sin duda en los años 80, en los casos tan emblemáticos como el de la tortura y muerte de la médica antioqueña vinculada, o que la vinculaban al M-19, que fue tan importante para medir parte del impacto del Estatuto de seguridad Turbay del 78. La médica... se me fue el apellido, bueno. Ese caso de reparación que fue tan sonado en el 84, 85, pues sin duda es uno de los emblemáticos, pero hay otros.

La Constitución del 86, que esto es algo también que no es muy, no aparece en muchos trabajos, es que tenemos la idea de que la Constitución era, había un proyecto político de la Regeneración, ya los trabajos muy serios que se han hecho pues muestran que no era uno; sino varios, al menos tres proyectos políticos en la Regeneración. Pero digamos que la Regeneración globalmente. Una idea muy autoritaria, centralista, poder presidencial acumulado, concentrado y eso es lo que sabemos, en distintos lugares lo leemos, es como una especie de estándar de la Regeneración. Pero lo que poco vemos es que la Regeneración, que la Constitución del 86 también impulsó un modelo para la justicia. ¿A qué me refiero? A que no solamente cambió el diseño institucional, la Corte Suprema Federal de 1863 era una Corte que en donde cada magistrado representaba a uno de los estados, cada estado estaba ahora representado allí. Esa Corte, esos magistrados eran elegidos por el Congreso (lo recuerdo por el Senado Federal), pero con origen en las legislaturas de los estados, o sea era un típico diseño federal. La Constitución del 86 no solamente quiere barrer con lo federal, con lo liberal-radical; sino también que reorganiza el derecho, centraliza el derecho, unifica el derecho. Parte de la unificación va a hacer que esta Corte Suprema, que es inicialmente una Corte, a finales del XIX va a ser Corte de casación, Corte de cierre, también tiene un proyecto... es decir, la Corte Suprema fue también parte del proyecto de la Constitución del 86. Ya no los eligen en el 86, con este sistema que he mencionado, cambian el modelo un poco mirando a Estados Unidos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 1886 son elegidos con este sistema. Nombrados, designados por el presidente de la República, directamente por él y confirmados por el Senado, pero como el Senado no está funcionando porque es el Consejo de delegatarios, ese primer grupo de magistrados son elegidos, o mejor, son confirmados por el Consejo de delegatarios.

Y como es bien sabido, pues era, digamos que poca independencia con los artífices de la Constitución del 86, de hecho, eran ellos mismos [risa]. Entonces claro, uno ve los primeros perfiles de esos magistrados, parte del problema que hay con las Cortes es que no tenemos unas reconstrucciones de las biografías, de los perfiles. Yo, pues en el trabajo que intento hacer, más o menos fragmentado tengo idea, he reconstruido algunos perfiles en estos años, pero esa primera Corte es fascinante porque tenemos gramáticos, tenemos literatos, tenemos una mayoría ultracatólica,

conservadora y prácticamente... Son siete, hay dos que son, uno de ellos es José María Samper, que recuerden que es un radical que luego se convierte al proyecto regenerador, a pesar de que es crítico con la, y es una de las figuras que ayuda a aminorar, la Constitución del 86 hubiera quedado más radical en términos conservadores, sino es, o sea, Samper hizo un trabajo ahí de contrapeso, a pesar de que él se había conservatizado, pero él es uno de los



magistrados de la Corte Suprema, de esa Corte Suprema. Y el otro es Froilán Largacha que es un liberal caucano, pero la mayoría de los magistrados, uno puede incluso ver alguno de ellos es el autor de \_Tránsito\_, la famosa novela costumbrista bogotana. Otro

más, no sé si es él, ha escrito una apología a un jerarca de la iglesia católica. Claro, también son estos, hay que tener en cuenta que estos abogados en general hicieron parte de las élites políticas durante gran parte del siglo XX, hoy ya no tanto, pero esta profesión hacía parte de las élites. Ahí pues está el trabajo de ENT 2 tan valioso sobre vidas honorables, es más atrás en el tiempo, muestra esas élites de -----que conformaron la República y demás. Pero lo cierto es que claro, era gente notable, pero que tenían unas características y eran afines a este...

Ahora bien, hay un aspecto fascinante

de esta primera Corte y es que hay un caso que me llama mucho la atención, incluso en casación; ni siquiera es de control constitucional porque esta Corte la única función que tenía constitucional, propiamente hablando, era que era la encargada de que arbitrar las objeciones presidenciales. Es decir, cuando el presidente de la República objetaba un proyecto de ley del Congreso, lo que hacía esta Corte era que tenía que dirimir la controversia si el presidente decía "esto es inconstitucional", entoes la Corte Suprema intervenía allí. O por lo que muestran esos primeros años era una tendencia de la Corte a preferir el, es decir, a darle la razón al ejecutivo. Pero bueno, esto, lo aclaro rapidito. Me interesa esta parte: en un fallo de casación civil de por allá del 1898, 99, tal vez (ahora verifico la fecha), hay una tensión muy fuerte y es que los matrimonios con la Constitución del 86 y la legislación posterior, los únicos matrimonios que se reputan válidos a partir de este momento son los católicos, acuérdense que parte del proyecto de la Regeneración y la Constitución es ocordapio [DUD 32:34].

Entonces aparece por ahí una pareja que ha tenido, que se ha casado por lo civil bajo el código de Cundinamarca, 70 y algo. Entones hay un problema con un predio, creo que es la cónyuge la que tiene, contrae una obligación, entonces le van a perseguir su lote porque entró en mora, entoes dice el acreedor "yo voy por este lote que es una garantía". Y hay toda una disputa de derecho privado, que no voy a entrar en detalles, pero lo cierto es que eso llega a la Corte Suprema por vía de casación, el tribunal de Cundinamarca lo ha resuelto, llega la Corte y la Corte de un momento a otro lo revisa y el acreedor argumenta que le han vulnerado sus derechos adquiridos porque el tribunal de Cundinamarca ha sostenido que como esta pareja se había casado por lo civil y la legislación luego del 86 dice que todo el que se haya casado antes se reputa nulo. La Constitución del 86, la legislación posterior anuló los matrimonios no-católicos, para obligar a la gente a casarse por lo católico, eso es un dato... valor en términos de lo que supone un proyecto político con alcances jurídicos y sociales, por supuesto. Entonces este acreedor dice "la

Constitución habla del derecho de propiedad y los derechos adquiridos y una legislación posterior a mi contrato, a mi negocio con esta pareja, pues ahora dice que ese contrato es, ese matrimonio es nulo” y al ser nulo eso produce unos efectos entre los cónyuges, bueno. Abrevio: la Corte Suprema dice varias cosas, dice “lo de la propiedad y esto que usted dice, yo no soy el guardián de la Constitución, a mí me toca es aplicar la ley” (en una especie de, yo soy la máxima Corte de Justicia), pero esa Constitución no es una Constitución... si es suprema, yo no soy el encargado de cuidarla. Primer punto para entender un poco ese papel de la Corte. Y el segundo punto que es el que me parece más importante para esta conversa, dedica dos, tres párrafos diciendo que la Constitución del 86 es la restauración de la moral porque el país estaba desencuadrado y que la restauración moral se logra con esta legislación y con estas medidas para restablecer el orden moral católico, la moral cristiana. Es decir, es una afirmación clara de jueces que están dirimiendo una controversia en materia civil y esto es algo que a veces pasa de agache, ¿no? Esta sentencia es muy mencionada por otro tema, pero pasan de agache esos dos párrafos, entonces uno dice bueno, la Corte está dirimiendo una controversia de derecho privado, un problema de obligaciones, pero se mete de paso a afirmar su postura sobre el orden jurídico, siendo que ese orden jurídico está atado a una manera de entender esa sociedad. Y entonces claro, esa es una evidencia que uno encuentra, el compromiso de esta Corte con ese proyecto político, ese creo que es un vestigio interesante.

Entonces esta Corte, como les decía, tiene un compromiso político... Varias cosas, entones el diseño institucional asegura el poder del presidente. Faltó agregar algo, estos magistrados son vitalicios, magistratura vitalicia. Un poco lo que yo, la hipótesis es que los regeneradores querían asegurarse una Corte cercana, al menos, por una o dos décadas. Y creo que esto también es importante para, cuando uno ve los proyectos políticos en general. Entones, ¿cómo se asegura uno un proyecto político de largo aliento? Pues una Constitución con un cierto diseño, una posibilidad de reformarla con cierto diseño. Si uno cree que va a tener mayorías en el Congreso, pues está tranquilo, pero de pronto si las mayorías le fallan, dejar asegurado una Corte cercana. Esa es una fórmula interesante en términos de lo que uno, de cómo se va entendiendo, cómo se puede garantizar estar en el poder durante varios años. Este diseño institucional, entonces magistratura vitalicia, elegidos por el presidente de la República, confirmación por el Senado, con este esquema, perfiles de los magistrados cercanos al proyecto político, función de unificar la ley a través de la casación y algunos vestigios como los que he mencionado, de compromiso político con el proyecto regenerar. Esa es mi radiografía rápida (si me he extendido, me excusan) de la Constitución del 86 y de la Corte Suprema.

Allí no hay Consejo de Estado, va a estar más adelante en el tiempo. Pero aún el Consejo de Estado (y esto lo

planteo con cierto respeto y probablemente matizado), yo diría que la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la justicia ordinaria y luego de 1910, cuando le dan el poder del control constitucional de las leyes, se convierte en el órgano de justicia más importante del país, incluso con el Consejo de Estado allí. Y algo que yo, digamos, una percepción que tengo más personal y de entrevistas que hice en algún momento con los magistrados y de conversaciones y de lecturas de periódicos es que realmente la gente quería estar en la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema era el órgano judicial. El Consejo de Estado era el tribunal contencioso, muy importante (con esto no estoy quitándole méritos a la labor del Consejo, es más como una apreciación, si se quiere sociológica de lo que suponía estar en uno u otro canon), porque es que tener la capacidad de definir la constitucionalidad de las leyes es un poder enorme. Ser el tribunal de casación era un poder enorme, pero además recuerden ustedes que la Corte Suprema además era la cabeza de la pirámide de la rama judicial, no había carrera judicial. En 1886 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegían con una injerencia, bueno, no en el 86, pero más adelante en el 20.

Los tribunales superiores, los magistrados del tribunal superior, ¿ustedes han visto que habla de masculino todo el tiempo? Pues es que la presencia en las altas cortes, la primera mujer llega en el 84, entonces... Los primeros magistrados de los tribunales superiores son elegidos para periodos muy cortos, dos años, una cosa así. Claro, cambia el diseño institucional, cambian en distintas reformas, pero los magistrados de la Corte Suprema los eligen y los eligen, fíjense ustedes, de ternas que presentan las asambleas departamentales, entonces, pues la conexión política es evidente. Si yo he llegado a la Corte Suprema de Justicia y tenía la capacidad de elegir de una terna que me presentaba la asamblea departamental, miren la correa de transmisión con las asambleas departamentales. Ahora bien, no son las asambleas departamentales que conocemos hoy; unas asambleas de élites. Recordemos la manera cómo se era elegido diputado, pero también recordemos que las asambleas departamentales tenían un poder enorme en las elecciones, distintas elecciones durante un buen tiempo del siglo XX. Era como una especie de competencias truncadas de la época federal que llegaron allí, pero ser un diputado de la asamblea departamental, o sea, años 30, 40, era de una importancia enorme en los departamentos, en los territorios eso era... como ser un pequeño congresista. Y entonces claro, y ¿quiénes elegían a los jueces de circuito, a los jueces de distrito? Bueno, los distintos nombres que tuvieron, pues los elegían los magistrados de tribunal. Entonces imagínense la cadena de relaciones que había entre "yo te elijo, magistrado del tribunal" ¿cierto? Y probablemente si alguien quiere ser juez, pues era muy fácil, roscograma era más complejo. Aunque habían otros factores que entraban allí: había pocos abogados, se graduaba poca gente, la gente que se graduaba tenía ciertos recursos, muchos de estos abogados eran prestigiosos y al mismo tiempo

políticos. Entoes era como un ver al gran penalista político y magistrado y llega a la Corte Suprema del Tribunal superior o alguien que era gobernador y pasaba a ser magistrado del tribunal y después era decano. Esta una historia interesante también de cómo se conforman esas élites, la profesión jurídica y las élites, eso es fascinante también.

Pero entonces estos magistrados de la

Corte Suprema tenían un poder enorme, no habían en buena parte, la primera mitad del siglo XX un tribunal disciplinario propiamente, tenían una capacidad de dirección, de nominación de funcionarios hacia abajo, una pirámide. Tenían la casación, tener el control constitucional, todo esto a pesar de que era la rama con más penurias, es decir, era la cabeza de una rama, que la llamaron en ciertos momentos "la cenicienta del poder del Estado" porque era la rama que menos recursos tenía, era la más empobrecida y la que tenía menos gente calificada en los niveles territoriales... Olvidé decir esto, durante una buena parte del siglo XX, los jueces municipales eran elegidos por los consejos municipales. Imagínense cómo era eso y además con presupuesto de los municipios, que esta es otra historia interesante, otra, es la historia de cómo se unifica la justicia en lo nacional, o sea, cómo se nacionaliza la justicia. Eso es otra cosa interesantísima, algún día, si me queda tiempo de vida [risas] hay que hacerla y la encontré casi que por accidente, porque ese no era mi interés, pero hay por ahí una sentencia de los años 50, está Rojas Pinilla en la presidencia de la Corte Suprema porque demanda por ahí un decreto que tiene que ver con un presupuesto de unos jueces municipales y eso también fue otra discusión como la que hemos tenido en materia de educación, ¿se acuerdan cuando se descentralizó la educación? Entonces sí, se descentralizó, pero pásame la plata porque yo no tengo recursos para manejar la educación en el municipio. La misma historia es la justicia: los municipios dicen "si yo voy a manejar los jueces, deme recursos". Entonces claro, la asimetría entre estar en un municipio rico y un municipio pobre era peor que la que, digamos, pero bueno, ahí me desvié un poco.

Entoes eran unos magistrados muy

poderosos institucionalmente en la rama, eran la cabeza de la rama y luego creo que los meten más o, ahí hay un factor de cambio que es las tensiones que tiene la Corte Suprema con Rafael Reyes en 1905, ahí hay una ruptura que creo que es importante, pero aquí estoy acortando terreno porque... En el año 1900 hay una intervención de la Corte Suprema que valdría la pena mencionar, aunque sea por los lados, que es el golpe de Estado del vicepresidente Marroquín. Esa Corte que es vitalicia y que ha sido carista, pro-Caro, por Miguel Antonio Caro, entra como, termina como desconcertada con el grupo de, con el golpe de Marroquín y termina plegándose en buena medida, Marroquín y en un fallo inesperado del año 1900, pues le toca decidir sobre un decreto de Estado de sitio dictado por Marroquín, recién posesionado, o más que posesionado, recién habiendo el golpe de Estado. La Corte Suprema tiene que decidir si ese decreto,

que es un asunto de términos procesales por la guerra de los mil días, si debe aplicarse o no y la Corte Suprema dice: "para decidir si este decreto debe aplicarse, lo primero que tengo que hacer es ver si el órgano que lo dictó es competente". Y entonces se meten todo un análisis de si Marroquín se tomó el poder de acuerdo con la Constitución y llega al extremo de declarar que hubo vacancia en el cargo del San Clemente, porque estar en Villeta, no es estar en Bogotá (y es que es fascinante, a mí me parece, pues, recreado en el contexto), pero lo cierto es que la Corte Suprema declara constitucional el decreto, ojo con esto. Y no hay ninguna norma en la Constitución que diga que la Corte Suprema tiene la competencia para declarar constitucional algo [risa], entonces es una especie como de defensa judicial de la Constitución de oficio, algunos dicen que ese es realmente un fallo inaugural del control constitucional colombiano, pero claro, si uno no ve la coyuntura política, pues... La lectura o la hipótesis que se, mi interpretación es que la Corte respaldó al golpe y eso es lo importante, porque en ese momento el congreso no estaba funcionando, entonces el único órgano en ejercicio activo en ese momento era la Corte Suprema y el salvamento de voto de los magistrados, los tres magistrados, es durísimo, dicen prácticamente que la Corte se entregó, digamos que perdió su independencia y que no saben de dónde salió este fallo. Luego, cuando uno lee, pues las, incluso unos textos por ahí de Marroquín, de San Clemente, que da la pelea por la, escribe textos diciendo que en un golpe de Estado se duelen de que luego los magistrados de la Corte están en un banquete con los golpistas, bueno, esto hace parte como de la historia de la época. Pero la Corte finalmente termina avalando el golpe de Estado de Marroquín, para decirlo en términos rápidos, ¿qué más actor político que ese?

Pero luego en 1905 hay como una crisis (yo voy rapidísimo) y Rafael Reyes con la Asamblea Constitucional que es muy cercana a él (de bolsillo diríamos) aprueban una reforma constitucional que creo yo va a ser fundamental en la primera mitad del siglo XX y es que acaba con las magistraturas vitalicias y les señala períodos de cinco años. Reyes es el que acaba con la magistratura vitalicia, pero Reyes toma una decisión que va a tener unas consecuencias importantes para el diseño institucional en la rama judicial y es que establece, también laboral, que el primero de mayo de 1905 todos los que tengan cierta edad y hayan estado al servicio de la Corte, quedarán automáticamente jubilados. En esa época no se pensiona a la gente, se le dan son las gracias de la pensión, no se jubila; sino que son las gracias.

Es el congreso diciendo "ah, usted sí, le voy a dar una pensión".

"Usted es viuda de un prócer de tal guerra, le damos tantos pesos". Pues la reforma constitucional que impulsa a Reyes (luego hay una ley) es que esta Corte entra a ser, o sea, ¡los pensionan! Y es una manera muy política de deshacerse de una Corte que le es incómoda. Y el primero de mayo de 1905 él nombra otra Corte, todos los otros se pensionan y va a ser como una de las primeras decisiones de otorgarle la gracia de la pensión a un cuerpo colegiado

en su conjunto, por decirlo de alguna manera, corporativo. Ya no es fulano, sutano; sino quienes hayan servido, esto de paso va a servir para que más adelante los magistrados de tribunal, los jueces en los años 20, 30, digan "necesitamos que nos hagan lo mismo que le hicieron a la Corte Suprema". Y es otra línea interesante de cómo se crean, digamos, la seguridad social en pensiones para la rama judicial, esa es otra veta interesante: el efecto no deseado de la reforma de Reyes.

¿Pero cuál es el efecto ya que nos

interesa aquí para esta conversación? (Me excusan si estoy dándoles muchos temas que no son del centro). Y es que al ser elegidos cada cinco años, van a depender de lo siguiente: la reforma de Constitución de 1910, que crea la acción pública de inconstitucionalidad, de la reforma republicana, pues que es tan conocida por nosotros, establece que la Corte Suprema decidirá la constitucionalidad de leyes y decretos, pero también reafirma lo del periodo quinquenal de Reyes, fíjense ustedes, es curioso, yo no he revisado con detalle ese y es por qué razón deciden que hay que seguir con periodos de cinco años y no con magistratura vitalicia, probablemente por esta idea de lo republicano, de alternancia en el poder y de checks and balances, se me ocurre que pudo haber sido por ahí la cosa. Pero lo cierto es que esta Corte, esta reforma del 10, establece que los magistrados tendrán periodos de cinco años y que serán elegidos por ternas que el presidente le presenta al congreso. Entonces fíjense ustedes cómo le inoculan los partidos políticos a la designación de la alta. Yo creo que era, claro, esta unión republicana además tiene una confianza enorme en que las instituciones con ciertas reglas pues generan resultados positivos. Fíjense ustedes, le reportan el sexenio al presidente de la República, lo bajan a cuatro años. Establecen estos frenos y contrapesos, la acción de inconstitucionalidad en cabeza la Corte y dicen "no, los magistrados de la Corte que estén cada cinco años, tengan periodos, que los puedan reelegir todo el tiempo, no hay límite de reelección, pero que sea el Congreso el que los elija: Cámara elige un número y Senado otro". Este diseño es muy bueno cuando uno piensa que llegan partidos diferentes al Congreso y al ejecutivo y demás, lo que se imagina uno es un poder, un control, pero esto empieza a cambiar drásticamente en 1914.

En 1914 gana abrumadoramente la

presidencia José Vicente Concha y Concha luego logra mayorías en el Congreso, no me acuerdo si en el 14 o en el año siguiente. Y en 1915 hay que elegir y posesionar una nueva Corte, una Corte Suprema. Claro y es una Corte hiper-conservadora. No es que la del 10 no lo haya sido; lo era, pero la del 15 sí que es una Corte... Ahora bien, hay una ley de minorías que obliga a que necesariamente haya una representación proporcional de las minorías en el Congreso, entonces ¿cómo es la elección de la Corte? Si uno tiene representación partidaria en el Congreso, haciendo un cálculo, ese partido tiene derecho a una silla en la Magistratura, pero como el Congreso era mayoritariamente conservador, era una

aplanadora de la [INAD52:24]

y desde ahí lo va a ser hasta el 30. En el 15 elijen a una Corte, digamos, con siete magistrados conservadores y dos liberales. Y esa va a ser una constante durante toda la hegemonía conservadora. Luego en la liberal se voltea la torta. Entoes empieza a hablar de Corte conservadora, Corte liberal. Entonces, tenemos un ejecutivo conservador, con mayorías legislativas conservadoras y una Corte predominantemente conservadora. Y además esa oposición de la Corte Suprema y del Congreso va a pintar de color azul o rojo toda la rama judicial hacia abajo. Estas historias que uno lee y que escucha de que llegaba un gobierno conservador o una mayoría conservadora, también hay que leerla, llegaba una Corte conservadora y si había coincidencia de periodos, probablemente barrían a los jueces, a las juezas, a los jueces, porque no había juezas todavía.

Entonces ese diseño institucional de

1910 creo que fue pensado de manera muy idealista y va a producir unos efectos, pues catastróficos, por ponerlo de algún modo, porque lo que vamos a ver de ahí en adelante es predominio del partido político de turno en el Congreso y en el ejecutivo, también en las cortes y de ahí hacia abajo en los tribunales. A tal punto que ya en los años 30, tal vez uno de los primeros que empiezan a hablar de que es necesario (y esto creo que es interesante también) y es que en finales de los 30 empieza a hablarse de la carrera judicial. Y es una manera de tecnificar esto, un poco los liberales diciendo "es necesario una carrera judicial, porque la justicia no puede estar en manos de la política", pero también los conservadores. Va a ser como un argumento de ambos partidos, en buena parte porque, pues cada quién sufrió lo propio, cada quién supo lo que era tener una corte liberal, siendo minoría o viceversa. Y esto apenas se va a empezar a consolidar en los años 70, normativamente y prácticamente hoy, hoy estamos hablando en el 2020 y hoy sigue siendo una disputa los nombramientos en propiedad, la carrera judicial, digamos que, uno diría que prácticamente es la Constitución del 91 la que realmente termina tomándose en serio la idea de que la meritocracia y la carrera judicial sacan de la disputa política y la justicia, pero realmente ese diseño institucional del 10, creo que fue uno de los que contribuyó a la idea de politización de... No sé si vamos bien así, o...

ENT 1: Supremamente bien. Yo quería

como, en este panorama que sumercé nos dio y para la Comisión es muy importante, nosotros estamos, el periodo de análisis de la Comisión es 1958 a 2018, eso es una cosa abrumadora. Pero entonces hay algo reiterativo y que nosotros hemos venido enfatizando y es todo este tema de los Estados de sitio y el Frente Nacional. Entonces quisiera como, si sumercé nos puede un poco ubicar en lo que fue ese periodo del Frente Nacional, cómo estaba la Corte y cómo fue esta respuesta pues a esa crisis que venía de todo este tema de los Estados de sitio que, pues era para, digamos los años 50 y 60, que lo hemos venido analizando mucho sobre el tema de la pacificación en Colombia y el tratamiento

al orden público en diferentes partes del territorio. Además, porque eso nos permitió enfocar dónde era la estigmatización de los territorios, frente a las zonas de supuesta perturbación, pero que está ligado como a todo eso, que termina siendo un tema político también.

TEST: Por supuesto, bueno, ahí

Mauricio García Villegas, Uprimny, Gayona han hecho tan buenos trabajos sobre la reestructura de los decretos de estado de sitio. Lo normativo, pero también claro, las posturas políticas, pero aquí yo quisiera conectar con lo que venía diciendo y es que el plebiscito de 1957, que también a veces uno no lo mira con cuidado en ese aspecto, también busca un cambio en el diseño institucional de la Corte Suprema y Consejo de Estado. Ahí lo que se plantea, esto es lo paradójico, es la junta militar la que incorpora esta pregunta al plebiscito, no los partidos, es que la Corte Suprema y Consejo de Estado ya no sean elegidos por los partidos políticos. Es decir, sacarlos de la elección política del Congreso y del ejecutivo. Y eso creo que va a tener un efecto importante en lo que vamos a conversar sobre el Frente Nacional y el Estado de sitio. Entoes claro, salen de los partidos, pero se establece la paridad política en el Consejo de Estado en la Corte Suprema, es decir, mitad liberales, mitad conservadores. Y eso se va a mantener hasta 1991, o sea, no es tan lejos la paridad política en las cortes. Tal vez es uno de los últimos vestigios que queda del Frente Nacional, uno de los pocos vestigios. Bueno, lo de la Registraduría es compartida: liberal y conservador con la, se cambió hace algunos años, era también como otro de los coletazos de ese arreglo institucional del Frente Nacional. Pero el caso de las cortes y se estableció la magistratura vitalicia y la cooptación y esto (a mi modo de ver y bueno, no soy el único que lo dice, creo) creó una especie de espíritu, de cuerpo dentro de la Corte Suprema y de la rama judicial, muy similar a la de las fuerzas militares después del 50. Es decir, una especie como de, como te digo el espíritu de cuerpo es que se despolitiza la fuerza pública en buena medida, ese es un efecto clarísimo del Frente Nacional, se despolitiza en términos de partidos, pero se politiza en términos del enemigo común y el enemigo interno, todo estos, guerra de guerrilla y todo lo que nos va a pasar con la seguridad nacional más adelante y en el caso de la rama judicial, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, como cabezas de la rama, como ya sus nombramientos no dependen de los políticos, ni del Congreso ejecutivo, se va creando una especie de independencia judicial que creo que es valiosa.

Y el sistema de cooptación incluso

entra en tensión desde el propio 1958, cuando el Congreso se instala ese año, una de las cosas que ocurre es que el Congreso empieza a decirle al presidente Lleras: "hágame el favor y me manda las ternas, para yo elegir a la nueva Corte". Entoes la Corte Suprema le dice "un momento, pero ¿por qué está pidiéndole ternas si nosotros somos los magistrados de la Corte". Estos han sido elegidos por la junta militar, los ha nombrado por decreto. Y entonces la Corte



dice "no, aquí tenemos unas vacantes, dos o tres" y rapidito ellos mismos dicen "la reforma del plebiscito es la aplicación inmediata". Y ellos mismos eligen a tres magistrados y la pelea va a seguir hasta el 60, 59, 60, hasta que finalmente el Congreso se impone y nombra, la interpretación del Congreso es que la reforma del 45 sigue vigente, es decir, que el plebiscito hasta que no se reglamente, no se puede aplicar. Entoes como no se puede aplicar, dice el Congreso "yo soy el encargado de elegir a los magistrados de la Corte". Y esto creo que es así muy importante porque esto vuelve y aparece en los 90, es constante en los 70 y los 80, la idea de que el Congreso tiene que volver a elegir a la Corte ya. De distintas maneras se propone que el Congreso como órgano legislativo, debe tener injerencia en la designación de las altas cortes. Fíjense que esto es algo que en buena medida el Frente Nacional apaga un poco ese partidismo, pero no desconecta, es decir, no acaba con la discusión de quién debería elegir a los magistrados de las altas cortes. Entonces ellos salen, se desconectan del partidismo, creo que ganan autonomía e independencia, pero desde el propio de los años del 58 va a aparecer una tarea que le van a dejar a la Corte muy fuerte y es la ley segunda del 58.

La ley segunda del 58 es ni más ni menos, una ley que se aprueba en plena disputa sobre qué hacer con los cerca de, creo que diez mil decretos habla, de Estado de sitio que se dictaron en el 48 y en el 57. Entonces dicen ¿qué hacemos con eso? Y aparece esta ley segunda, que es una ley de blanqueo y es que blanquean todos los decretos de Estado de sitio de Rojas Pinilla, de Laureano, de Ospina Pérez, de la junta militar. Un poco lo que dicen es, lo que dice Lleras es: "yo no puedo gobernar si se dismantela el orden jurídico" es decir, en el ideal está barrer con lo que pasó, un poco el Frente Nacional es un borrón y cuenta nueva, pero esa ley segunda no hizo borrón; sino que reincorporó, lo que hace es ampliar la vigencia, dice "todos los decretos de Estado de sitio" (es un articulito) "dictados entre tal y tal se reputarán legales, salvo que sean declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, claro, entonces vaya y demande uno por uno, ¿no? Y de hecho hasta hace unos, yo vi hasta hace unos años decretos de esa época que la Corte constitucional declaró inconstitucional [risa] 50 años después, claro, porque siguen vigentes. Creo que había un hospital, si no estoy mal, no me acuerdo si fue Buenaventura, tal vez me equivoque. Creo que el lote era, había sido, no sé, lo habían entregado por un decreto de Rojas Pinilla, entoes había una disputa sobre ese decreto en el año 2010, 2011 (estamos hablando de decretos de los 50). Entonces lo que hace la Corte Suprema es empezar a declarar inconstitucionales algunas leyes, algunos decretos de Estado de sitio después de esa ley, son muy pocos, por ejemplo, declaran inconstitucional el que tiene que ver con el ejercicio de la profesión de odontólogo, bueno, ahí hay algunos que no recuerdo muy bien. Pero lo que va a empezar a hacer esa

Corte Suprema, en esa segunda mitad del 20, es también a conocer que los decretos de demandas contra decretos de Estado de sitio, relacionados con propiamente el orden público, es decir, algo que empieza a cambiar en el 68 es que parece que esos decretos de Estado de sitio ya están más ligados al orden público porque los que se han dictado en los años 58, el 57, han mezclado lo, el orden público con cualquier otra cosa. Dado que el Congreso estaba cerrado, pues Rojas Pinilla gobernó por decreto de Estado de sitio, sobre todo los temas y no necesariamente relaciones con Orden público. Pero ahí propiamente en el 58 empieza a discutirse ya, por ejemplo, algunos decretos relacionados con las zonas de orden público, más que todo. Y aquí creo que hay que volver sobre algo que se me quedó por ahí y es así como vemos efectos no deseados o efectos impredecibles de leyes, de normas que se dictan, también de precedentes judiciales, es decir, de decisiones judiciales. En 1944 le intentan un golpe de Estado al presidente López Pumarejo, como es conocido. En 1945 los militares y los líderes del partido conservador, que han sido vinculados y condenados por la justicia penal militar, dan un último, utilizan una última herramienta y es demandar esos decretos ante la Corte Suprema, que es de mayoría liberales, buscando que se caigan esos decretos, porque esos decretos lo que hacen es juzgar civiles por militares, por parte de militares y además son decretos que fueron retroactivos, es decir, el decreto producía una serie de efectos retroactivos.

La Corte Suprema allí fija una jurisprudencia y pone una doctrina que se va a mantener durante toda la segunda mitad del siglo XX y por eso la menciono para la conversación, que consiste en lo siguiente, la resumo, dice: en tiempos de paz no se pueden restringir los derechos y libertades, la restricción tiene que ser mínima, pero en tiempos de guerra se pueden restringir todos los derechos y libertades, salvo uno, el derecho a la vida. ¿Por qué el derecho a la vida? Porque existe la prohibición de pena de muerte por la Constitución. Es lo que muchos sostienen que es el cheque en blanco que se le da al ejecutivo. Una sentencia que se hace para salvar a López, que está cayendo, claro, si uno se pone en eso, en los zapatos de la Corte del 45, pues la sensación de que hay una insubordinación militar aliada con políticos para tumbar el régimen, para tumbar al presidente, pues era evidente que lo iban a tumbar. Entonces en la medida que se toma eso un poco diciendo: "se está cayendo un presidente, un golpe de Estado es gravísimo, un golpe militar, el presidente puede tomar medidas extremas para evitar la caída del poder y entonces dice eso. Esa sentencia del 45 va a ser reiterada una y otra vez en los años 50, 60, 70 y 80. Es decir, lo que hace la Corte Suprema ahí es mencionar que no existe mayor límite al presidente, bajo Estado de sitio, porque se trata de garantizar la paz. Y eso, claro, ahí estoy siendo un poco, exagerando con los argumentos, pero esa es la conclusión. Y también va a ser muy usada para justificar la justicia penal, para procesar civiles por delitos relacionados con la subversión, terrorismo, etcétera. La

utilización o el juzgamiento de civiles por militares ya venía desde el año 70. Hay unos decretos, un decreto por allí, creo que es de Pedro Nel Ospina o de Suárez, que lo permite, un decreto de Estado que lo permite, pero los más contundentes van a ser los decretos de las bananeras, de tiempos de la masacre bananera, los sentiríamos los excesos de la justicia penal militar contra estas personas son bien conocidos.

Pero ya luego en los 70 ya se va a

decir no solamente que esa justicia penal militar, pues que es un exceso, realmente en los 70 es que se empieza a ver ese juzgamiento como un exceso, es decir, había críticas al juzgamiento de civiles por parte de militares, pero se hace más agudo esto en los 70, porque en los 70 empieza a ir de la mano con las acusaciones de torturas. Es decir, no es solo violaciones al debido proceso; sino torturas en instalaciones militares y digamos, se junta como el abuso de los órganos y organismos de seguridad del Estado, con esto y la justicia penal militar. Pero hay que decirlo, que desde los años 20 en Colombia hubo una tradición, es decir, una tradición de casi 60 años de que civiles eran juzgados por militares y eso toma varias formas, ¿no? Durante todo el tiempo fue una especie de disuasión, si usted quiere asumir las consecuencias de que un militar lo juzgue, se juzgan los delitos de guerra, pues aténgase, una especie de disuasión. Pero en los 80 ya se vuelve es un asunto de seguridad también para el juzgador. Es decir, cuando ya el narcotráfico se vuelve más organizado y más sofisticada la delincuencia, recuerden que alcanzamos a tener un decreto que dice que los narcotraficantes deben responder ante la Justicia penal militar. Justo allí, en esa época es que la Corte Suprema declara inconstitucional ese decreto. Algunos dicen "la Corte se asustó, porque fue lo mismo juzgar guerrilleros, autorizar el juzgamiento de guerrilleros que de narcotraficantes, de carteles, etcétera". Pero lo cierto es que ese diseño, esa permisión de la Corte para que civiles juzgaran militares, que a mi modo de ver es de las más graves históricamente, se mantuvo hasta los finales de los 80, es decir, es una tradición de casi 60 años. Si yo tuviera que resumir una, digamos, una ausencia de protección de libertades y de garantías, como era el lenguaje de la época y de derechos por parte del control constitucional colombiano, durante el siglo XX, yo diría que es haber permitido que la justicia penal militar juzgara civiles. Creo que ese es como el principal aspecto para ahondar allí. Claro, después los abusos de los Estados de sitio por parte de la Fuerza pública también terminan como salpicando a la Corte, es un poco... Si su control ha sido más duro, más fuerte, no hubiéramos tenido Estatuto de seguridad, pero ese es un ejemplo.

Pero hay algo que yo quisiera mencionar

y es por ahí en plena tensión, en el 61, creo que es, con el gobierno de Valencia, es más adelante, 63, hay una tensión por una reforma judicial, es un contexto bastante complicado y Valencia dicta un decreto relacionado con juzgamiento de civiles por parte de militares, es un decreto donde, es tal vez

una de las primeras veces donde la Corte Suprema claramente dice que no de pueden estar creando tribunales, es decir, empieza la Corte Suprema como a decir que la rama judicial es una sola y que cada que el Gobierno declara que hay que crear un tribunal especializado o militar, lo que sea. Eso es una forma de romper la estructura constitucional, porque los únicos que pueden juzgar son los jueces. Y eso va a ser más evidente en los años 70, en incluso va a ser motivo de uno de los salvamentos de voto muy fuertes de magistrados a finales de los 70. El propio Estatuto de seguridad, por ejemplo, de frente hay dos magistrados que dicen "los civiles solo pueden ser juzgados por civiles, esto viole el principio del juez natural, pero además esto lo que usted tiene que hacer presidente (y se lo dicen así a Turbay, en su momento) usted lo que tiene que hacer es fortalecer a la rama judicial". O sea, ¿para qué sigue creando jueces penales militares? ¿Para qué sigue fortaleciendo la justicia penal militar si los jueces podemos hacer lo que hacen los militares y garantizando los derechos y las libertades? Entoes también hay como una especie de cómo la Corte Suprema empieza a dar como sus peleas contra el ejecutivo, no todo el tiempo es como que subordinado a esto y a finales de los 80 es cuando realmente la Corte Suprema dice "ya no puede haber fuerzas penales militares" y eso es lo que da origen a la justicia especializada, a los jueces sin rostro, que es como una especie intermedia entre, digamos la dureza del juzgamiento por militares, pero perteneciendo a la rama judicial. En general ese segundo periodo entonces es una Corte que tiende a darle la razón al presidente, al ejecutivo en el Estado de sitio, pero en buena medida porque sigue instalado ese precedente de que en tiempos de paz el control del ejecutivo es el fuerte; pero que en tiempos de guerra hay una capacidad del ejecutivo de leer qué es lo que está ocurriendo.

Hay decretos de Estado de sitio que demuestran por ejemplo la dimensión del conflicto y es en....hay unos tal vez del 77, hace poco incluso lo encontré y es un decreto que dice que, debido a las operaciones de combate tan fuertes, se necesita trasladar recursos para gasolina de los helicópteros. Los helicópteros se quedan sin gasolina de la cantidad de operaciones aéreas que está llevando a cabo el Ejército, la Fuerza aérea y ese decreto de Estado de sitio la Corte lo declara constitucional y un poco dice es "claro, guarda conexidad con el orden público". Y ¿por qué? Pues porque el orden público está turbado porque las operaciones militares así lo requieren, estamos hablando del 76, 77. Entoes uno también con esos decretos de Estado de sitio puede ir midiéndole, tomándole la temperatura al conflicto. Hay decretos de Estado de sitio, o mejor, bajo el Estado de sitio se permite, por ejemplo, gran parte de los operativos militares y de organismos de seguridad, luego del robo de las armas del Cantón Norte, por ejemplo. Esa recuperación, esa operación Ballena azul del M-19, la recuperación, todo se hace bajo reglas del Estado de sitio, porque es precisamente el Estatuto de seguridad uno de los más potentes aparatos de persecución en general. De nuevo

también la misma idea que mencioné antes: por perseguir a la subversión, también se persigue a opositores, disidentes, digamos los excesos que se están, más que evidenciados en los informes, en su momento de la Comisión Interamericana de derechos humanos, las visitas, todos los documentos, pues, que muestran los excesos bajo el Estado de sitio, bajo el decreto del Estatuto de seguridad, que fue un decreto de Estado de sitio que compiló otras normas anteriores.

Algo que tal vez me olvidaba

mencionar es que se establecen casi que normas procesales penales, mediante el Estado de sitio llega a ser casi que una especie de normatividad paralela, en donde uno ya se olvida que es un decreto de Estado de sitio. Entoes hay decretos de Estado de sitio, por ejemplo, en los 80, plena época de la toma de la embajada dominicana y en donde hay un buen grupo de militantes del M-19 y de guerrilleros simpatizantes, bueno, de todo hay allí, y los están juzgando. Y este famoso juicio del siglo se ha convertido en un tinglado, pues en una tarima para el M-19 que aprovecha para dar unos discursos. Es decir, termina la arenga política y hay una preocupación porque dicen "bueno, nos estamos juzgando y están aprovechando esto como plataforma política", con distintas, digamos por lo mediático que ha sido el grupo. Y entonces dictan un decreto de Estado de sitio que dice algo así como que el defensor de los sometidos a la justicia penal militar, pues obviamente son ellos, ya no tendrá tantos días para leer el expediente; sino que se reducirá a la mitad. Entonces es como una medida de Estado de sitio, ¿no? Como no dice en ninguna parte que están aprovechando eso, pero cuando uno lee el contexto y la prensa, pues es obvio que, entoes el decreto lo que busca es que el proceso sea rapidito, para que de una vez condenen y que esto no de mayor lugar al despliegue político del M-19. Pero lo interesante es que la Corte Suprema declara en un fallo cerradísimo, se salva por poquísimos votos. Declara inconstitucional este, o sea, dice la Corte como esto ya es, ya es el extremo, ¿no? Ya que los juzguen militares, perfecto, o sea, perfecto no; es constitucional. Que haya reglas, pero que usted modifique de tal manera que un expediente más o menos de tanto y dice así, como que un expediente de mil páginas se leyera en tantas horas, usted lo que está haciendo es un juicio sumario, eso ya viola todas las garantías mínimas. Y lo interesante es que la Corte está dividida y por escasos votos se declara la inconstitucionalidad. O sea, la Corte está enfrentada y claro, uno lo que puede ver es la línea que dice "no, bajo Estado de sitio se puede". Y la otra que dice "no, un momento, bajo Estado de sitio, eso no se puede". Recordemos que, por ejemplo,

ENT 1: TEST, me surge una

inquietud mirando todo esto y que tiene que ver con el relacionamiento con las fuerzas militares. Cuando sumercé dice esto de tiempos de guerra y en tiempos de paz y precisamente viniendo del golpe, lo que era el golpe y el miedo, digamos de Lleras también, de lo que podría pasar, uno después se encuentra y

yo no sé si, a mí se me vino, no sé si puedas, si sea una locura, con el discurso del teatro Patria, que de una u otra forma también era buscar que los, ahondar como en quién tiene la responsabilidad política y la militar. Entonces ustedes y básicamente han dicho entoes "los militares a lo militar y los políticos a lo político", pero si uno se va al fondo de la cosa no es tan así. Entoes como que uno encuentra y volviendo ya aquí en lo que usted está diciendo de estas relaciones con la Justicia penal militar, porque muchas de estas decisiones que toma la Corte, también están en estos Estados de sitio y en este marco del orden público, pues avalando opciones de los militares y de este poder, de una u otra forma militar y político, también de los militares. Entonces no sé ahí usted cómo ve esa tensión o cómo ve ese relacionamiento de la Corte también, con esa fortaleza o ese poder militar de la época, porque venimos de todos estos coreanos que de una u otra forma montaron todo un ideario de seguridad y defensa nacional. Y usted lo dijo, lo del enemigo también.

TEST: Realmente esta, algo que no lo

dije al comienzo, pero me ayuda como a graficar es que la Corte no actuaba en una burbuja, no estaban en una burbuja y un poco lo que intento contar en ese artículo que les digo que hace como tres tomas, tres escenas: escena 1:

bananeras, escena 2: bajo Rojas Pinilla, escena 3: Estatuto de seguridad. Me parece que son como tres buenos lugares para hacer el sondeo en una Corte que realmente está temerosa del orden público, es decir, una Corte que ve las tomas a los pueblos, que ve las acciones, que ve que un grupo guerrillero asesina al inspector general de las fuerzas armadas, que un grupo guerrillero, por ejemplo, asesina al ex-ministro al que han adjudicado gran parte de los excesos en el paro del 77, por ejemplo, que hace parte de lo que dicen que es el asesinato del ministro se me fue el nombre, que era ministro de gobierno, luego, ministro de.... ¿Pardo Vuelvas? Pardo Vuelvas. Entoes ya es ministro de agricultura cuando él deja el ministerio de Gobierno y luego el, pero cuando era ministro de gobierno es el paro del 77. Entonces, por ejemplo, la Corte Suprema respaldó los decretos para reprimir el paro del 77, que era para prohibir la movilización, pero que termina utilizándose para reprimir. La Corte Suprema de justicia declaró un decreto que establecía sanciones disciplinarias a los directivos del seguro social y del FECODDE, o sea que buscaba evitar los paros, los decretos de Estado de sitio que se dictaban para evitar los paros eran durísimos, era: "si usted es empleado público y participa en un paro, prácticamente es destituido fulminantemente". La Corte Suprema a todo eso le da: "es constitucional, es constitucional"

o sea que realmente sí hay una idea de que el de orden público está turbado, de que hay una amenaza comunista, una amenaza Castro comunista, una amenaza subversiva. Están viendo lo que está pasando en el Cono sur, está viendo Argentina, están viendo lo que ha pasado en Chile, están viendo Brasil. Entonces realmente sí es una Corte, termina plegada o convencida de que el orden público está turbado, un poco convencida de los argumentos del ejecutivo, pero también con

una evidencia empírica de que realmente hay situaciones, digamos que ponen en riesgo la seguridad del Estado, creo que es una mezcla de todo eso. Hay un pensamiento conservador del orden público, un conservador poco dado a las libertades, es decir, poco, que privilegia el orden público y la seguridad sobre los derechos.

Pero aquí quiero rápidamente hacer

una mención y es que esto empieza a cambiar en 1978-79, principalmente cuando llegan penalistas a la Corte Suprema como José María Velasco y otros, Gustavo Gómez, por ejemplo, Gómez Velásquez, que en los salvamentos de voto son absolutamente críticos con varias medidas como el Estatuto de seguridad.

Incluso Turbay Ayala luego en un evento por allá en el DAS llega a decir que la Corte Suprema, es decir, que hay magistrados en la Corte Suprema que están digamos que cercanos al, es decir, que no entienden la... que está parapetados, bueno, por ahí dice alguno que hay guerrilleros parapetados en las cortes, dice en su momento. Pero un poco lo que los pone es: más o menos parece que ustedes no vivieran aquí, ¿no? Miren el orden público, la inseguridad y generando con esos salvamentos de voto criticando el Estatuto de seguridad y luego cuando se declara inconstitucional la reforma de 1979 que crea la Fiscalía general de la nación y otros órganos, el decir de muchos lo que buscaba era crear aparatos de seguridad para perseguir más a la oposición, según un sector de la izquierda. Dice Turbay Ayala en un evento en el DAS, que el fallo de la Corte Suprema lo que hace es provocar que haya que declarar más Estados de sitio y que haya que utilizar más la justicia penal militar, porque al país se lo está llevando la subversión. Camacho Leyva ayuda también, poco antes ha ayudado en esa misma línea.

Es decir, el ejecutivo empieza

también, cuando la Corte Suprema plantea que las medidas son excesivas o cuando hay sectores de la Corte que empiezan a criticar la violación de derechos humanos, la respuesta del ejecutivo es de poner en la picota a la Corte Suprema. Es decir, plantear que nos dejan gobernar, que no entienden el orden público, que no entienden la seguridad y en sectores amplios de la opinión pública, la lectura que convence es la del gobierno. Solamente algunos sectores que trabajan, que defienden derechos humanos, algunos sectores que están preocupados por la violación de derechos humanos y en sectores más garantistas de derechos, en la lista, sobre todo, que son los que más han visto los abusos, ¿no? porque saben cómo están, cómo tienen que defender a sus clientes que son personas torturadas, etcétera. Entonces claro, esta nueva ola de penalistas sensibles con los derechos humanos son los que empiezan en la Corte Suprema a generar algunos cambios o al menos a hacer voces que ya no son, que son contrarias a esa mayoría. Pero en general la tendencia es a proteger una visión de que hay que defender el orden público. Entonces creo que es de nuevo la ideología, la ideología ni siquiera en términos de una ideología de partido, sino de conservación del orden público.

ENT 2: TEST, yo quiero preguntarle

una cosa es que creo que preciso en el documento que estoy elaborando en estos momentos, que es sobre Estados de sitio, creo que hoy han salido un montón de cosas ahí y por eso quiero aprovechar porque sé que seguramente lo que usted me diga, eso va ahoritica para la escritura, eso es ya que lo voy a incluir [risa].

TEST: Adelante.

ENT 2: Y es que precisamente en uno

de los documentos de la excepcionalidad que hace Mauricio García y Rodrigo Uprimny, habla de tres momentos de la Corte en relación a los Estados de sitio. Entoes pone: primero 58, 80, donde es un control formal donde simplemente se limitan a revisar que tenga la firma del presidente y los ministros y dar carta aval a todos los decretos que se expiden bajo la excepcionalidad y los decretos de Estados de sitio. Un poco bajo la idea de que eso es un tema político y que a ellos no les compete eso y dan todo el aval de todo, pu, pu, púm, sale. Después habla de un momento que ya es más como hacia los 80, donde dice "aquí ya hay una mirada diferente". Si bien no van a, si bien siguen con la misma idea de eso es un tema político, nosotros hacemos un control formal, sí van a empezar a tener mayores controles sobre lo que hemos hablado y son sobre los decretos que se expiden bajo el Estado de sitio. Y va a entrar todo lo de justicia penal militar y va a haber como una mirada mucho más de ceder control, pero a los que pasan durante el Estado de sitio, no a los decretos de Estado de sitio. Y ya después obviamente sale lo del 91, que están todos los controles que se dieron en esos Estados de sitio. Yo creo que usted ya tocó algunas cosas, pero como pa precisarlos y es que me gusta mucho esa mirada política donde está la verdadera intencionalidad, lo verdaderamente provocador de por qué se generan esos cambios. Entonces ahí profe preguntarle por qué esa intencionalidad de ese primer periodo, de dar vía libre, dónde está esa mirada, por qué se daría vía libre, por qué después de ese periodo ya empieza a haber como unos controles diferentes, no al Estado de sitio, pero sí a esos controles de Estado de sitio, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está moviendo para que la Corte empiece a tener esa mirada que es frente a los Estados de sitio? ¿Qué es lo que la provoca? ¿Qué es lo que motiva a que eso suceda?

TEST: Bueno, el trabajo de Mauricio

es estupendo y yo ahí digamos que tengo una, me parece que es una buena guía, es un estupendo trabajo, pero como mi ejercicio es más caso por caso, fue más caso por caso y más de la narrativa, yo, por ejemplo, entre el 50 y el 80 sí estoy de acuerdo, pero yo matizaría, por ejemplo, con esos connatos de independencia, como por ejemplo con la reforma judicial que se intenta en el 65. También creo que con los salvamentos de voto que uno empieza a ver allí, pero lo que empieza a osar sobre todo en el 80 en la Corte es la idea de la conexidad, la necesidad de la conexidad que debe haber entre el decreto que declara el Estado de sitio y los decretos que se dictan. Entoes la Corte se vuelve a



hacer, se vuelve más juiciosa, dice "hay conexidad entre la turbación del orden público en el Urabá con dictar un decreto que establece que habrá subsidios para los militares que estén en Urabá", pero también para los militares que estén en Antioquia, pues del Urabá sí, pero lo de Antioquia no lo meta allí, o que se podrán comprar tres helicópteros Dell, porque necesitamos hacerlo por decreto porque, supongo un ejemplo que no está, pero sí más o menos. La Corte empieza a ser más juiciosa es con la conexidad entre los hechos que originan la declaración del Estado de sitio con los Estados de sitio en concreto. Yo creería o yo diría que de los 80 hacia acá, creo que hay un cambio importante de percepción por el tipo de magistrados que empiezan a llegar a la Corte y esto es interesante, que no son los constitucionalistas, son los penalistas los que impulsan este cambio.

Creo que es importante también del

80, creo que hay un parteaguas y es el Estatuto de seguridad. Si bien la Corte declara constitucional el Estatuto de seguridad casi en su totalidad, creo que las denuncias del movimiento de derechos humanos que en ese momento es mucho más fuerte por ejemplo... se me fue el nombre de él. Foro por los derechos humanos que empiezan a conformar, por ejemplo, no es gratuito que esté Alfonso Reyes Echandía en ese foro por los derechos humanos, que esté el Escalón Talam, bueno, tantos orígenes diversos. Pero creo que ese Estatuto de seguridad del 78 y los efectos de las denuncias, digamos, evidentes de violación de derechos humanos, de tortura, sobre todo, de allanamientos ilegales, de confesiones bajo presión, etcétera. Sin duda alertan a la Corte sobre la necesidad de mayores filtros a ese tipo de decretos de Estado de sitio. Por ejemplo, con ese fallo del 88, 87, que establece que no puede haber más civiles juzgados por militares, hay dos lecturas: una, la que diríamos es la optimista, que es ya la Corte entendió que esta, que ya debe ser superado esos juzgamientos, esa es la dirección digamos optimista, de optimismo antropológico. La visión pesimista es justo cuando los narcotraficantes pasan a ser sujetos de la justicia penal militar, la Corte dice "es inconstitucional". O sea, ¿por qué durante tantos años la Corte no consideró inconstitucional que subversivos, militantes, bueno, todos los que aparecían con la categoría de subversivos, podían ser juzgados por la justicia penal militar? Justo cuando meten a los narcotraficantes la Corte lo declara inconstitucional, entonces el pesimismo antropológico lo que, un poco la lectura pesimista diría o dijo en su momento, es que la Corte Suprema post Palacio de justicia, en medio del poder del narcotráfico, probablemente lo que quiso fue, digamos, fue un fallo que muestra cierto temor de la Corte por enfrentar el fenómeno del narcotráfico.

Esto en su momento en la prensa y por allí

pues se, pero creo que también esa lectura pesimista debe contrastarse con la optimista y es que ya desde finales del 70, 78, 79, habían salvamentos de voto y un sector importante en la Corte, sobre todo un sector formado, que empezaba a plantear que no podía ser posible que la justicia penal militar juzgara

civiles, sin importar el delito. Entonces digamos que la explicación puede ser multicausal y esto es la dificultad que hay sobre las decisiones judiciales, ¿qué hizo la Corte? Fueron las normas, fue la postura doctrinal o fue el contexto. Por ejemplo, la Corte Suprema avaló gran parte de los decretos de Estado de sitio luego del 84, hay un decreto de Estado de sitio del 84 cuando asesinan al ministro Lara Bonilla, ese decreto estuvo vigente hasta el 91, hasta la Constitución del 91. Con base en ese decreto es que se dictan los decretos que permiten convocar a la constituyente, pero varios de esos decretos que se dictaron, ENT 2, por ejemplo, fíjate a finales de los 80, a mediados con Barco, Barco se enfrenta mucho a la Corte. De hecho, hay un capítulo por ahí que leí, se llama "La Corte Suprema o el escollo de Virgilio Barco". Y es que Barco está enfrentando

el narcotráfico y el paramilitarismo que está digamos en su primer momento, 88, 89. El Urabá está prácticamente en el momento más agudo de masacres y se considera que se debe crear un tribunal y también han matado a varios líderes defensores de derechos humanos en Antioquia. No sé si ustedes recuerdan que son días seguidos, matan el bloque Sabad, así, uno dos, a los de Ada, en días seguidos, martes, miércoles, jueves, viernes, cada día asesinan a un líder. Entonces Barco decide crear un tribunal especial para investigar estos casos y dicta una cantidad de medidas especiales para Urabá y la Corte Suprema las declara inconstitucionales todas. O sea, hay una racha de cuatro o cinco decretos de inconstitución, que la Corte todos los declara inconstitucionales y el argumento es: el presidente excedió sus facultades. ¿Qué sale a decir Barco a los medios de comunicación? De hecho, hay una alocución televisada de Barco, Barco dice "la Corte no deja gobernar, la Corte no deja que el orden público se restablezca". Claro, para un ciudadano del común en su momento es "pero si es que Urabá está ardiendo, están matando gente, ¿qué más quiere la Corte?" Y la Corte lo que dice "pero es que pa eso está la rama judicial. ¿Usted para qué va a nombrar jueces si es que para eso está la justicia penal militar? O sea, no nombre más cosas, fortalezca los que están". Entonces eso es curioso porque, por ejemplo, ahí una de las hipótesis: "es que también la Corte no solo está preocupada por los derechos humanos, es que también está preocupada porque se está desarticulando la rama judicial". O sea, la rama judicial cada vez tiene menos, la justicia penal colombiana cada vez tiene menos asunto central y la justicia penal militar ha mordido una parte importante de las competencias.

Hay otra cosa ahí que quisiera

mencionar y es que cuando uno habla sobre la justicia penal militar, con gente que estuvo allí, que la conoció, dicen ellos que más o menos para el 88, 87, la justicia penal militar está desbordada. ¿Por qué? Porque se congestionó. Como cualquiera puede ser guerrillero, subversivo, terrorista, o sea, cualquiera que esté echando piedra en una universidad, bajo un decreto de Estado de sitio de estos, le encuentran \_El capital \_de

Marx y le encuentran un pasamontañas y así no tenga armas ni nada: "este va para la justicia penal militar". Entonces por ejemplo dicen "si usted tenía una gorra militar así no sea del Ejército, pues mientras establecen si es del Ejército, eso es material de intendencia o qué se yo, o cualquier cosa de estas o usted tiene aerosoles, bueno. Entonces la justicia penal militar está congestionada y sectores de la justicia penal militar, digamos de manera informal, gente que la conoce me dijo en su momento que incluso la justicia penal militar tampoco quería ya seguir conociendo esos casos, o sea, llega un momento en que hay una especie de desprestigio del propio funcionamiento. Eso aparece en la prensa como en los 70, como en el 79 yo encontré por ahí algunas cosas de estas, pero para los 80, finales de los 80, pues realmente (que eso es algo que no se ha estudiado en Colombia) no hay un buen trabajo sobre la historia de la justicia penal militar en Colombia, no hay el primer trabajo de eso. Y si eso se llega a hacer esclarecería muchas cosas, porque esa es la caja negra. O sea, tuvimos un sistema de justicia penal que investigó y juzgó a miles de personas en por lo menos durante, constantemente durante treinta años, desde los 70, 60. Tenemos sí denuncias de violaciones de derechos humanos, etcétera, pero no del funcionamiento, o sea: número de casos, cuáles eran los casos, cómo se decidían. Y fue una justicia que funcionó paralelamente, entonces al parecer esta justicia también está colapsada, un poco. La propia justicia ordinaria quiere retomar esas funciones y ese va a ser un argumento muy fuerte de finales de la década de los 80, la Corte Suprema diciéndole al gobierno nacional, al ejecutivo, que es mejor fortalecer la propia rama judicial, la justicia extraordinaria, que seguirle dando facultades a la justicia penal. Entonces, bueno creo que me desvié un poco, pero la...

ENT 2: No, está súper bien. Y tengo

otra, es que aprovechando que eres experto en el tema, yo no soy abogado entonces ahí me pierdo un poco, pero para mí es bastante esclarecedor.

TEST: De hecho, ENT 2, me

excusas, si quieres yo puedo, ahora con ENT 1, contigo, te doy las referencias de unos trabajos que tengo ya completos sobre el Estatuto de seguridad, que tienen ya como los datos, porque aquí se me está perdiendo mucha fecha, porque me estoy volviendo viejo, tengo mucho dato por ahí enredado.

ENT 2: Perfecto. Quería preguntarte

más es que la Constitución surge en medio de una paradoja, surge bajo un Estado de sitio que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, bajo un Estado de sitio que es la que finalmente le da potestad a la recesión electoral civil para contar los votos para la convocatoria de la asamblea, son dos decretos expedidos bajo Estados de sitio. Entonces está la paradoja porque la Constitución obviamente entra a ponerle más control a estos Estados de sitio. Lo que yo te quería preguntar a ti es si había otra forma de haber convocado a esa asamblea que no fuera mediante Estado de sitio. Y ¿por qué te lo pregunto? Porque es que, si sí había otra forma, eso da cuenta de que todavía estamos

bajo la costumbre de hacer todo bajo Estado de sitio y que no podían vislumbrarse otras maneras de hacerlo, eso quería preguntarte. ¿Sí había otra forma de convocar esa asamblea que no fuera mediante estos decretos que se expidieron bajo Estado de sitio?

TEST: Estupenda pregunta, pero yo

iría más atrás y es que el plebiscito del 57 también se, es por dos decretos de Estado de sitio. Entoes ¿cuál es el lío? El lío es que la Constitución del 86 establecía que solo, o sea, la Constitución del 86, la original, establecía que (sí, porque como hay tanto cambio) esta Constitución establecía que solo el Congreso de la República podía reformar la Constitución, porque tenía una idea (tú que eres ----- muy sembrada de la soberanía nacional. La soberanía nacional es el propio cuerpo representativo; nada de soberanía popular en ese momento se hablaba. Ese órgano representativo que tiene la capacidad de reformar la Constitución es el que entra un poco en crisis en el 52, porque Laureano Gómez en 1952 quiere proponer una reforma constitucional de corte falanquista. Ya lo sabemos y él lo que quiere es digamos que, echar por tierra la reforma del 36, esta reforma liberal que es vista como, incluso algunos dicen que es casi comunista, bueno, con todas las disputas de la época. Entoes lo que hace Laureano es que el Congreso convoque una Asamblea Nacional Constituyente que es la NAC [INC: ANC], esa constituyente de la ANC es la que legitima Rojas en el poder, paradójicamente. Se hace para profundizar el poder de Laureano, a Laureano lo tumban y termina es convalidando, legitimando el poder de Rojas. Esa NAC funciona como Asamblea Constituyente hasta el 57, pero según cuentan los expertos, en los pactos de Sitges y Benidorm, estos líderes de los dos partidos conservador y liberal, lo que plantean es "bueno, ya tenemos un pacto y ahora cómo lo podemos ejecutarlo". O sea, la NAC, que es la Asamblea Constituyente, pues es una NAC rojista que no tendría ningún sentido convocar una Asamblea Constituyente, entonces por eso usted dice, articulan la herramienta del plebiscito, dicen sería un plebiscito. Un plebiscito en donde el pueblo diga "sí o no estoy de acuerdo con este pacto". Y entonces dicen ¿y cómo lo echamos a andar? El congreso está cerrado, la NAC no la van a convocar, no la van a pedir que haga esto, de hecho, ya la quieren disolver, antes, es un órgano de Rojas". Entoes dicen "el plebiscito es la salida, pero ¿cómo lo convocamos?" La junta militar dicta dos decretos de Estado de sitio, porque es la única opción, pero el plebiscito termina refrendando ese proyecto constitucional y uno de los artículos que se refrendan, ese plebiscito es, en adelante solo el Congreso podrá reformar la Constitución, es decir, volvimos al modelo previo a la NAC de Rojas.

Para 1991 ¿qué es lo que tenemos?

Pues el Congreso es el único que puede reformar la Constitución. Pero hay dos antecedentes ENT 2 y ENT 1 ahí que hay que tener en cuenta. En 1977 López Michelsen convoca una pequeña constituyente que busca reformar la

justicia, bueno, dos, tres temas. Esa Asamblea Constituyente es aprobada por acto legislativo del Congreso, es decir, el Congreso le entrega ese poder a esa Asamblea. Y tres días antes de que convoquen a esa Asamblea, el presidente López pues está convencido que esa Asamblea Constituyente va a ser un hecho. El viernes siguiente o tres o cuatro días antes, la Corte Suprema declara inconstitucional esa posibilidad y dice "no señores, el Congreso no puede delegar un poder que le es propio" es decir, la función de reformar la Constitución desde el plebiscito del 51 la tiene el Congreso, el Congreso no le puede entregar a nadie esa tarea, esa función. Como no se lo puede entregar a nadie, la declara inconstitucional. Luego, en 1981 la Corte dice "esta reforma es inconstitucional (la del 79) porque hubo vicios de trámite. Mucho cuidado con esto, la Constitución en ninguna parte dice que la Corte Suprema es competente para controlar las reformas constitucionales, o sea ese es un activismo de la Corte Suprema de la época. Pero ¿qué es lo que van a lograr esos dos fallos que les dimos los 70? Lo que han llamado algunos "el bloque institucional". O sea, llegamos a 1990 y el único que puede reformar la Constitución es el congreso. No solo porque la Constitución lo dice; sino porque la Corte Suprema así lo ha decidido. Entonces, ¿qué les queda? Se intenta una reforma por el Congreso, Barco empuja una reforma por el Congreso. Esa reforma está a punto de aprobarse y tiene muchos de los componentes que tiene la Constitución del 91, sobre todo en diseño institucional. Pero ¿qué es lo que la hace fracasar? El famoso narcomico. Ese mico que le meten de prohibición de la extradición, que lo detecta el ministro Lemos Simmonds y ante el riesgo de que la prohibición termine aprobada en esa reforma constitucional del 89, 90, el gobierno retira el proyecto y entonces llegamos a un momento en donde se dice "está cerrado" o sea, el Congreso no puede reformar la Constitución, cuando al Congreso le dan la oportunidad de reformar la Constitución mete un gol, mete un narcomico. Y entonces empieza ya a ampliarse esta idea de que el Congreso no es el órgano legitimado para esto, es el órgano competente, pero no es el órgano legítimo. Esa distancia que empieza a haber entre el país político, el país real, bueno, todas estas categorías que se empiezan a usar en ese momento y pues ahí viene la constituyente, entonces dicen "no, la única forma es desbloquear por la vía de la movilización social popular", pero entonces dicen y ¿cómo canalizamos esa movilización de la séptima papeleta? ¿Con dos decretos de Estado de sitio? O sea, se reutiliza la fórmula del 57 y detrás de esa fórmula están varios constitucionalistas, o sea, realmente, no solamente es el grupo de estudiantes de la séptima papeleta, sino también, digamos, constitucionalistas que dicen "es que a esto hay que darle una salida y la salida es que el presidente dicte estos decretos". Entonces luego el escollo va a ser cómo la Corte Suprema convalida estos dos decretos, pero en estos momentos, la respuesta corta sería: sí había otro camino, el congreso. La respuesta larga era que el contexto político mostraba que el Congreso no lo iba

a hacer. Dos coyunturas críticas del régimen político son solucionadas por la vía de decretos de Estado de sitio y de reformas convocando acuerdo.

ENT 1: Profe, son las 4 de la tarde,

pero resulta que aquí en mi guía [risas] de temario de la entrevista, pues tengo todavía temas como un poco hablar sobre violaciones de derechos humanos, el tema del papel de los penalistas me gustaría ahondarlo mucho más porque creo que ahí tenemos también frente a la violación misma a los abogados y a los penalistas, pues nos gustaría hacer como algunas preguntas. Me gustaría preguntarle algunas cosas sobre las normas sobre, el aval a normas de amnistías y a los procesos de paz. O sea, cómo también la Corte jugó en esos procesos de paz que, pues sobre todo de los 80 y pues ya con la Constitución del 91, mirando un poco lo del 90, precisamente lo del 90 por la vinculación y la participación política de aquellos movimientos insurgentes. Pero entonces mi pregunta es, profe, ¿es posible que tengamos una próxima sesión?

TEST: claro

ENT 1: Porque pues de todas maneras

no quiero correrme en el tiempo, entonces nosotros pediríamos nuevamente la sala, yo le estaría informando ocho días antes, para que lo podamos planiar y que sea un día miércoles también para poder como en este mismo horario, para poder como terminar esa parte y hacer esa segunda sesión, porque la verdad esto ha sido maravilloso. O sea, hoy yo creo que, ENT 2 y yo estábamos así, porque de verdad necesitábamos esta parte, es muy importante.

TEST: Yo me quedo en muchos detalles

y me excuso porque como el trabajo mío ha sido de historia institucional, historia social, historia política, entonces tiendo a desviarme y es como difícil compilar todo en poco tiempo. El trabajo ese que está en la revista Izquierdas, de la persecución del comunismo, puede que tenga algunos datos de interés. El otro trabajo que se llama -----de la historia de la Corte Suprema", ese es un capítulo del libro, pero yo creo que debo tener, es que no lo, es que con esto de la pandemia dejé muchos libros en la Universidad. Ese libro se publicó precisamente en un especial de los cien años de la gaceta de la Corte Suprema y es como el único artículo así [risas] que no está en la otra línea. Hay un texto que se llama "-----" que también está publicado como artículo, todo eso está en pdf en la red, hay mucha cosa que lo que he tomado yo son como algunos capítulos y los he ido profundizando y les he dado forma de artículo y he seguido investigando. Entonces quedan como unas muy pequeñas monografías de periodos, entonces de pronto pueden ser útiles ya como para datos, el fallo y la fecha, porque a veces es tanto dato que uno se va como perdiendo y yo sé que ustedes necesitan afinar para ciertos documentos, entonces...

ENT 1: Todo eso, doc, si no los puede

hacer llegar por vía de correo sería fantástico, con eso ya poder también citarlos, que eso es una de las cosas que sería muy importante poder citar el

material.

TEST: Sí, gran parte de lo que, casi

todo lo que hemos conversado está allí, salvo pues estas otras percepciones que son más como de, que no alcanzan a ser hipótesis, sino que uno medio las insinúa, porque es que sobre esto no hay mucho. Y este trabajo de ustedes es valiosísimo, no solamente en términos de memoria y de verdad; sino también como insumos para trabajos historiográficos, ya académicos, más adelante.

ENT 1: Precisamente y en esa tónica,

el grupo ha estado pues como muy juicioso en el tema de impunidad y en el tema de justicia penal militar. Y hemos venido haciendo un ejercicio muy serio para poder presentar todo esto de justicia penal militar, pues porque además la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 tiene la ventaja de que el Ministerio de defensa, la misma justicia

penal militar, debe entregar sus archivos, pues no ha sido tan fácil, pero...

TEST: Dos colegas míos intentaron

hacer esos trabajos por allá a comienzos de los 2000 y decían que ese era, es muy complicado, pero si ustedes lo van a hacer y ojalá, a mí me gustaría poderlos conocer en algún momento cuando ya haya un documento público, pues, por supuesto. Porque uno de los aspectos que queda digamos en deuda a mí me parece, del trabajo de Mauricio, del de Rodrigo, el mío, todos los que nos hemos aproximado al Estado de sitio, es que hay una especie como de eslabón perdido allí y es entre los decretos y cómo la Corte los controla y los efectos reales. Es decir, cómo sufrió, cómo padeció el que fue sujeto de la justicia penal militar en un proceso, eso lo sabemos es por uno que otro abogado que lo contó y que lo... pero el otro lío es que eso está muy en tono de denuncia, entonces también se pierde la capacidad de contrastar y está muy contado desde la víctima todavía. Lo otro está como más perdido, lo institucional está más perdido.

ENT 1: Nosotros hablamos de la

aplicación de la norma en terreno, cómo se aplicó la norma en terreno, por ejemplo, en el caso geográfico de departamentos como el Tolima, el Huila. Entoes ahí hay cosas que, pues con el tiempo y que sí queremos que, además que estos materiales puedan servir a los próximos investigadores, pues porque ya la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 se acaba el próximo año, pero sí quede el material, acá el SIM, el Sistema de Información Misional, el hecho es poder recaudar toda esa base de información para que pueda ser realmente analizada.

TEST: A mí una vez un alto mando

retirado de esa parte de justicia penal militar en una conversación de esas así me dijo "cuando investiguen bien eso, se van a dar cuenta que era mucha la gente que se absolvía. O sea que había como otra cara, es que siempre se ven la violación, las torturas, pero un poco como lo del debido proceso, ¿no?" O sea, eso fue una justicia paralela con regla, entonces esa es la paradoja de todas las justicias penales militares, que operan bajo reglas. Entonces, digamos uno

conoce los casos de los excesos, de las violaciones, pero no de la dinámica más cotidiana, no de los grandes casos emblemáticos sino de la gente que salió absuelta o condenada, pero no los casos como les digo, los casos que salían, que eran tan mediáticos, sino del campesino que terminaba con unas botas del Ejército condenado en un proceso de esos y que a veces terminaba absuelto, a veces no, pero que se movían por ciertas reglas y eso es digamos interesante en general, pues, creo que es lo menos abordado de todo, qué bueno que se pueda alzar desde ahí, desde memoria y verdad.

ENT 1: [suspiro] Doctor, muchísimas

gracias, entonces yo le estaré enviando la próxima invitación y a ENT 2 muchas gracias también por la compañía, entonces les deseo muy buenas tardes.

TEST: Ya les comparto los trabajos.

ENT 1: Bueno, muchas gracias.

TEST: Chao.

AUDIO 122-PR-02304\_87018

ENT 1: Sí, perfecto. Entonces hoy ---- del 2020, continuamos la sesión con el TEST, agradeciéndole nuevamente doctor, el acompañarnos aquí en la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 y en este tema que como veníamos hablando, resulta tan complejo y tiene tantos vacíos. Así como estábamos hablando ahorita de, hay periodos en los que en realidad en el momento de los análisis nos quedábamos pues con las normas, pero nos hacían falta los contextos, nos hacía falta verlo además desde una parte académica mucho más completa. Pero bueno, en esta sesión, nos quedan solamente tres preguntas y como le venía comentando, nos interesa mucho la pregunta final que va a ser centrada en esas recomendaciones que sumercé como experto nos puede dar a la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 y a los analistas, frente a la no-repetición, a los puntos de no-repetición que podemos ver, desde el punto histórico y socioanalítico, ¿no? Entonces una de las preguntas que teníamos y que pues queremos abordar en esta sesión de hoy es si en algún momento y en ese proceso que sumercé ha hecho de investigación, ¿si ha evidenciado que la Corte Suprema haya elaborado algún tipo de estudio (o así no sea la Corte; sino otros estamentos) o análisis o exámenes sobre las violaciones a derechos humanos que hubiesen acarreado esas medidas gubernamentales que fueron adoptadas bajo las figuras jurídicas de excepción? Si de pronto tiene conocimiento de ese tema, pues de esa relación y esos estudios que se hubiese podido hacer sobre esas violaciones a derechos humanos.

TEST: En esta etapa, antes del 91, no conozco que la Corte Suprema lo haya hecho, yo diría que en algunas de las sentencias de responsabilidad del Estado y de reparación directa del Consejo de Estado del caso, este tan sonado de la médica CONOCIDA 2, la amiga de CONOCIDO 3, bueno, se me fue el nombre completo, este caso del 84, 85, en Colombia el Estado fue condenado, se me va la memoria, ella fue torturada, una serie de vejámenes bajo el Estatuto de seguridad. Esa



sentencia del Consejo de Estado creo que es una de las más importantes en términos de que hace un estudio sobre esa vulneración particular, probablemente haya algunas más, pero no desde la Corte Suprema de justicia, propiamente. La que sí creo yo, las dos sentencias, en especial una de los fallos de la constitucionalidad de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, sobre todo la segunda del 90, lo que hace es una revisión del contexto político de esos últimos años y cómo llegamos a ese punto que parece el no-retorno de Estado fallido casi y por qué (ese es uno de los argumentos sociológicos para justificar que por medio de un decreto de Estado de sitio, se pueda convocar a una constituyente). Y ese creo que es de los fallos más importantes en términos de reconocer que la justicia tiene que contribuir en alguna medida al rescate institucional, por ponerlo en esos términos.

Lo que hay es mención de los excesos de los decretos, de las medidas de Estado de sitio en algunas sentencias de los 80, como esta que he mencionado, no, de los 80, no, esta de 1978, la del Estatuto de seguridad es crítica con los excesos, aunque no habla de torturas y de excesos en el campo. En la aplicación sí del amplio margen que tiene el ejecutivo para establecer delitos y penas de manera retroactiva, violaciones al debido proceso, en términos de esa preocupación más general, más de la normatividad y menos de los casos concretos porque, al fin y al cabo, pues la Corte Suprema solamente hacía control de constitucionalidad abstracto, sobre las normas, no tenía la dinámica pues contemporánea que sí tiene la Corte constitucional de tutelas, pues plantear estos casos. Yo creo que también en el caso de la Corte constitucional sí tenemos varias sentencias que hacen una reconstrucción del contexto, yo estoy haciendo un poquito memoria, las de Justicia y Paz, pero no me acuerdo muy bien si es la de, si hay Corte constitucional, esta sentencia, bueno la de ley de víctimas hace una reconstrucción del conflicto, se me está yendo una... creo que es la del marco jurídico para las cárcel, si no estoy mal, creo que es en esa que hacen una alusión, es decir, que uno ve que las Cortes nos están en la misma burbuja, que están entendiendo las dinámicas del conflicto armado, tal vez en alguno de los comienzos de la Corte constitucional del 92, probablemente unas de estas de Estado de conmoción interior, de las primeras, si no estoy mal aparece alguna remisión a los excesos, no a violación de derechos humanos, pero sí a los excesos. Eso sería como en general lo que yo diría.

Ahora que mencionabas al inicio, las recomendaciones que sería como lo final, una de las constantes y lo conversábamos tal vez en la anterior entrevista, en la anterior charla, que esta idea de que hay impunidad en el sistema de justicia es constante en distintas coyunturas políticas. Gran parte de la discusión bajo la violencia política, finales de los 40 y en los 50, es que la Corte Suprema y en general toda la justicia, sobre todo la justicia penal es incapaz de ofrecer condiciones necesarias para que no haya impunidad y en últimas eso se ata al PAS. Uno ve, por ejemplo, en el 50 una de las primeras llamadas que hace Laureano Gómez a la Corte Suprema en plena es que tiene que

trabajar para garantizar que no haya impunidad. Y entonces claro, es algo que yo digo por ahí (tal vez en el libro sobre la Corte): la mirada sobre la justicia en general en Colombia tiende a asociarse a lo penal. Es decir, la impunidad parece, claro, porque además por el impacto que tiene, el impacto social que tiene, parece que el grado de impunidad o los niveles de impunidad son como indicador más importante, tanto los gobernantes como la propia opinión pública, la sociedad tiende como a mirar, claro, después ya en los 90 se empieza a hablar de indicadores de acceso a la justicia, ya esa es una preocupación como más de derecho fundamental, más contemporáneo, pero lo que uno ve durante toda la mitad del siglo XX, la segunda mitad es el problema de impunidad.

Luego viene con Rojas Pinilla también el problema de impunidad y a la impunidad entonces suelen achacársela a la falta de capacidad institucional de la rama judicial. Algunos la justifican por la falta de cualificación de los miembros de la rama, entoes ahí surge esta idea de la carrera judicial, de que hay que tener una carrera judicial, meritocrática, o sea que hay que tecnificar a la rama judicial para combatir la impunidad, luego va a ser un asunto central para crear la Fiscalía, primero en la iniciativa de reforma de Turbay en el 79, que se cae en el 81, se declara inconstitucional. Pero luego con el uso y la justicia penal militar, en buena medida aparece como justificado por la incapacidad de la justicia penal ordinaria para enfrentar el delito, crimen organizado del delito, sobre todo el de la subversión, ya después piensan que el narcotráfico también. Pero fíjate, ENT 1, que también cuando se fue la justicia sin rostro, la justicia especializada, es como un intento de dotar de herramientas de seguridad a quienes están ejerciendo la función judicial, pero ya por fuera de la justicia penal militar. Eso lo decía tal vez en la anterior conversación, en un momento es que se cree que la justicia penal militar tiene más dientes, más capacidad, es más disuasiva que la justicia ordinaria, pero luego cuando ya cuando el crimen está tan organizado y cuando matan jueces, cuando matan funcionarios judiciales dicen "no, el asunto es de seguridad de los que adjudican". Y allí en ese momento es que aparece como ante la inconstitucionalidad de la justicia penal militar, la justicia especializada, la justicia sin rostro y demás. Entonces, y bueno ya cuando encontramos, ya en los 90 sigue siendo la impunidad una preocupación central de los gobiernos y de toda reforma a la justicia.

Y ahora con el acuerdo de paz de la Habana, los acuerdos, el de la Habana y luego el del Teatro Colón, viene la preocupación o digamos ahí lo que surge es el argumento de que esa transición genera impunidad. Es otra manera de entender la impunidad, impunidad de los actores armados y pues en toda esta discusión en que estamos en los últimos cuatro años, este y que seguirá yo creo que otros años más, es si realmente esta Justicia Especial para la Paz y todos los ajustes y los diseños institucionales que provienen del acuerdo, si garantizan o no impunidad. Entonces esa es como la discusión en la

que estamos, pero es una constante, un argumento que aparece siempre como causante del conflicto armado, como una de las causas del conflicto armado, ¿cierto? Pero también aparece como una consecuencia de los acuerdos para intentar salir del conflicto armado. Entonces estoy recordando la impunidad que se sigue adjudicando por algunos sectores al acuerdo que se llega con el M-19. En los 90 con el Quintín Lame, que es el digamos, el centro de políticos sigue siendo el M-19, ya nadie habla del Quintín Lame, impunidad, ni del EPL, ni nadie habla de esos acuerdos, el centro es el M-19, ahora las FARC, cuando es el Frente Nacional, pues como siguen las élites, los dos partidos gobernando, allí hay un pacto, un parte de silencio y de lo que conocemos de la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 que se organiza en ese momento, cómo en parte Rojas es también chivo expiatorio del Frente Nacional, pues eso está más oculto, pero es llamativo y ahora, a partir de esta conversación, me parece que es más visible eso. Entonces la impunidad como un eje central del conflicto, pero también como un aspecto central para determinar la paz y es utilizado políticamente, por los actores políticos, por los actores armados, por los actores que hacen dejación de las armas.

Y siempre en cada contexto es esta idea de que hay que fortalecer la justicia, en cada contexto es la idea, digamos en el luego de los acuerdos en el caso de las FARC, pues uno diría que, más que fortalecer, es crear un sistema de justicia que genere verdad, reparación, no repetición, que ese es el aparato al que se le apuesta. En los 90 no se le apuesta a ningún aparato porque como éramos... pero ahí, por ejemplo, en la Constitución del 91, gran parte del debate político es que hay que fortalecer la justicia. Están en el discurso de los 70, están los discursos que captan cooperación internacional, cuando en los 70 y 80 empieza el gobierno de los Estados Unidos, USA, a este programa de fortalecimiento de la justicia, el programa de, esta idea que hay del Rule of law, de que si uno fortalece la justicia de estos países, la protección de derechos humanos también genera desarrollo. Empieza esta idea de que hay que fortalecer lo institucional y creo que estamos en eso. Ahora está muy centrado en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero creo que también, si revisamos las reformas a la justicia desde el gobierno Santos, la que se archivó y luego la del equilibrio de poderes que terminan, en parte piensa lo de la justicia, pero de la cúpula de la justicia. Si uno piensa en la que propuso el presidente Duque al iniciar su mandato, la que se repotenció en el 2019, en las propuestas que se han hecho en los últimos meses en este conflicto que hay de tensiones en el ejecutivo, Cortes, viene la idea también de que hay que reformar la justicia para fortalecerla.

Entonces creo que cuando uno habla de responsabilidad, pues tendría que pensar no solamente en las posturas doctrinales que pudieron haber permitido los excesos, creo que también habla uno de independencia judicial y de unas condiciones institucionales para el ejercicio de esa independencia. También en términos de fortalecer la meritocracia, yo leía hace unas semanas que un

porcentaje alto de los funcionarios judiciales en el país están en provisionalidad. Parece que es una constante en gran parte de América Latina, eso, por ejemplo, pues es una señal de debilidad institucional tremenda. Yo lo decía en la anterior entrevista, durante los años 30 y 40 empiezan a decir que es necesario que la justicia sea de carrera y eso pues apenas estamos logrando que sean de carrera. Entonces no solamente pasa por más presupuesto para la rama; sino por una cantidad de condiciones estructurales. No es gratuito que antes del 91 la rama judicial se le haya considerado la cenicienta de las tres ramas del poder público, en términos presupuestales, en términos de carrera judicial, yo creo que sí hay un avance importante, pero sí hay unas debilidades institucionales que sin duda contribuyen, no solo pensando en la Jurisdicción Especial para la paz; sino en el delito, en la infracción cotidiana, en la manera en cómo se enfrenta el día a día. Pero también sumado al problema de populismo punitivo, ese sí es más reciente, el populismo punitivo de querer meter a la cárcel y de crear tipos penales según las olas de la opinión pública, según los casos emblemáticos. Entonces es complejo, porque es por un lado populismo punitivo, inflación de tipos penales con la misma estructura de la rama judicial, rama judicial con pocos recursos y con pocos funcionarios que ya viene congestionada, que ya es morosa. Entonces diría que uno de los problemas centrales es que, mejor uno de los factores centrales de la impunidad y la dificultad de tramitar la impunidad, tramitar las soluciones a la impunidad, es que gran parte de ellas pasan por un fortalecimiento de la rama judicial, que no es como decir uno "voy a darle más presupuesto el próximo año"; sino todo lo que he mencionado, pero no es un problema nuevo.

ENT 1: Sí.

TEST: Yo siempre menciono que en el año 52, cuando el presidente Laureano, en el 50, llama de un momento a otro de urgencia a la Corte Suprema a que se reúna con él, así como había un mandatario por ahí que le gustaba así, reuniones de urgencia. El presidente Laureano lo hace y entonces los reúne y les dice, que pues le ponían al país esta disparada, que hay que tomar medidas y una de las soluciones que él les propone es que les dice, uno de los anuncios, es que va a comprar no sé qué tantas máquinas de escritura.

ENT 1: [risas]

TEST: Y eso es visto en las ramas como... En su momento en los 80 era más computadores, ahora es no, una justicia digital, es que necesitamos es más tecnología. Entonces a veces son tantos factores que contribuyen a que uno tenga una institucionalidad fuerte en la rama judicial que históricamente uno ve como las mismas soluciones, más computadores, más presupuesto, crear más jurisdicciones, pero el asunto es mucho más grueso porque está más imbricado.

ENT 1: TEST, con esta parte que usted me habla ahorita y se me viene a la cabeza todo el tema, pues de las amnistías y los indultos y toda esta, digamos, hubo en un momento de la historia de este país un fuerte análisis al

delito político. Pero, digamos, después eso se pierde y sin embargo uno ahorita cuando hace como el trasegar de las amnistías y los indultos, termina siendo también, en este país no fue lo suficientemente fuerte para decir bueno, estas eran unas medidas que se pensaban en un momento dado para la pacificación, pero no se lograron tampoco, o sea, no fueron tampoco la solución.

TEST: No y por ejemplo, si uno revisa con juicio la muerte, los asesinatos de las personas que participaron de distintos procesos cuando se desmovilizan o cuando se reintegran, el nombre que le queramos dar, también marcan la historia política de al menos de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la desprotección que sufren muchos de quienes han estado en las armas y que luego son beneficiados o que llegan a algún tipo de acuerdo, pues empezado por los más emblemáticos y más notorios como el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, pero pues muchos otros, lo que estamos viendo de manera contemporánea, pues eso se puede rastrear en buena parte del siglo XX, es decir, la dificultad. Claro, hay amnistías, ha indultos, pero esto no supone como una aceptación general de la sociedad de que se ha surtido un proceso de conformación de actores legales armados con distintas orientaciones, con distintos propósitos, son capaces de eliminar a aquellos que se han sometido a estos procesos. Bueno, también pasó en su momento con quienes amnistiaron esas guerrillas con Rojas Pinilla. Esas historias son pues bien conocidas, en los 50, 60 y creo que estaba haciendo memoria de un libro que es central para entender todo esto es el de Robert, el de la paz olvidada, se me olvidó el apellido de Robert, profesor joven además con un trabajo muy interesante. Que su libro en inglés sale justo, aparece por coincidencia cuando se está sellando el acuerdo de la Habana, pues permite también rastrear ese posconflicto, posviolencia de mitad de siglo, posviolencia política.

Entonces sí, lo del delito político que fue, yo recuerdo además que los profesores de derecho penal, fui al Cauca donde estudié y en general los penalistas eran muy preocupados por el delito político. De hecho, pues gran parte de estos decretos de estratos de Estado de sitio, segunda mitad del 20, están enfocados en perseguir la subversión, que es un delito político y otro tipo de delitos. Que luego, claro, en los 90 se va a hacer más complicada la tensión, la aceptación de las, del delito político, digamos, la tensión entre el delito político y los derechos humanos, entre la justificación del derecho político cuando hay violaciones severas de derechos humanos, hasta llegar pues a la discusión fuerte que hay sobre el estatuto de Roma, sobre los delitos de lesa humanidad, si el delito político puede llegar hasta justificar... Es decir, si ese fin altruista que siempre se dijo que había detrás del delito político, puede, digamos entra en tensión con la violación de derechos humanos y sin duda pues se impone una nueva manera de entenderlo. Luego cuando aparece el que se murió recientemente, la lucha antiterrorista, después del 11 de septiembre del 2001, algunos incluso movimientos que se consideraban de liberación nacional, empiezan a ser ya configurados como grupos terroristas en un terreno global,

digamos, de lucha contra el terrorismo y adquieren otras connotaciones esas disputas hasta, pues la discusión jurídica tan fuerte que se ha tenido sobre los límites, sobre cómo entender, por ejemplo, la autonomía del delito político frente a otros delitos, yo no soy peñalista, por supuesto, pero sí hay realmente una transformación de los debates jurídicos sobre el derecho político, debates jurídicos y políticos sobre el delito político. Sin duda pues el acuerdo de paz, la ejecución del acuerdo de paz ha puesto otra vez sobre el tapete esa discusión, pero sin duda la lucha global contra el terrorismo también transformó la manera como se comprende y sin duda el discurso de los derechos humanos y el auge de la protección de los derechos humanos en orden internacional. Ese es un ejemplo que se pone siempre de presente para hablar la diferencia entre la negociación con las FARC y la negociación con el M-19. Con el M-19 la discusión sobre la vulneración de derechos humanos, no solamente en términos internacionales, sino locales, era una diferente a la que tenemos hoy. No hablábamos de delitos de lesa humanidad, castigadas con fracciones internacionales, etcétera y sin duda creo que eso afecta la manera como se comprende el delito político.

ENT 1: Viniéndonos un poco, pensando en esto del M-19 y ya con la generación de la Constitución del 91, ¿cómo piensa usted que todo este proceso del 91...? Que digamos, venía también de unos momentos de negociación, con unos actores armados específicos, bajo unas ideologías de ese momento específicas, pero ¿cómo llega el 91 a ese cambio constitucional? Y ¿qué significó esa transformación también para las cortes? Digamos ese proceso que uno podría decir este proceso del 91 tenía muchas cosas, pero en el fondo tenía el componente del movimiento armado, del movimiento guerrillero, con otros no, ¿no? También. Porque hace poco estábamos mirando todo lo de Casa verde, por ejemplo y en un documento que yo leía decía que no le interesaba en ese momento el gobierno la participación política, por ejemplo, del sector de Marulanda. Entonces que preferían no negociar, (que eso es como una tesis) preferir no negociar con ellos; negociemos con estos, pero porque tampoco queremos que en la Constitución política entren estos. Entonces uno como que ahí ve que en el fondo, en ese fondo político pues también trascendían muchas cosas, pero en esta dinámica que estamos viendo de todo lo de las cortes, ¿cómo se da toda esa transformación frente al ejercicio del 91?

TEST: Bueno, ahí hay varios aspectos y es que, por ejemplo, la Corte Suprema de justicia no está de acuerdo en que se cree la Corte Constitucional, no ha estado de acuerdo desde los años 60, desde que se quiere crear en el 68, se opone. En el 78 declara inconstitucional la reforma del 77, que si bien no habla de crear una Corte constitucional sí tiene una reforma a la justicia también y la del 79 pues que sí fortalece la sala constitucional de la Corte Suprema y que se declara inconstitucional dos años después, en el 81. Entonces para 1990, 91, y por ejemplo la constituyente, el propio presidente de la Corte Suprema va a la Asamblea Constituyente y en un discurso muy bueno (yo lo tengo

por ahí reseñado en el libro de la Corte) él dice que se quiere crear un control constitucional que es político y que es una especie como de tentación de mirar experiencias comparadas y de desechar lo autóctono, que pues en Colombia ya ahí la Corte Suprema querer ese control constitucional, etcétera. Entonces realmente quién propone la Corte constitucional en la Asamblea Constituyente no es ningún constituyente; quién propone es el gobierno de Gaviria y dentro del gobierno de Gaviria, la propuesta no viene del ministro de justicia, porque el ministro de justicia ha sido magistrado de la Corte y no está de acuerdo con el cambio. Eso lo enseña muy bien el profesor Manuel José Cepeda en varios de los escritos que él tiene de esa coyuntura, que está compilado en *Polémicas constitucionales*, un libro que publicó Legis por allá en el 2008, yo creo, 2009. Por aquí está, es esto, este libro [se los muestra]. Él aquí hace una semblanza corta, pero aparecen otros textos con mayor detalle de cómo la Corte constitucional no surge allí, pero además casi que no la logran aprobar, se salvó por poquitos votos en la Constituyente. Bueno el argumento que logra seducir a los constituyentes es el que también se dijo al presidente Gaviria por lo que se dice de los testimonios de la época es que le plantean que se requiere una corte nueva para una Constitución nueva, que cómo es posible que una Corte que es tradicional, pues que está diseñada para otros propósitos, también siga siendo juez constitucional en esta dinámica de una carta de derechos más robusta, etcétera. Y esto parece que es finalmente lo que seduce o lo que persuade, mejor, a la Constituyente y se aprueba esas medidas.

Otro dato que a mí me llama la atención es que en sus inicios la Corte constitucional le ofrecen ser magistrados algunos y algunos rechazan eso, se me ocurre que la razón sea porque consideran pues que este es un órgano muy nuevo, que no tiene todavía el prestigio, entoes hay dos o tres casos que les proponen y aparecen en la prensa (yo hice alguna revisión de prensa en su momento) le dicen "le ofrecen a fulano de tal la Corte constitucional, pero declinó. Entonces es como un órgano que la gente no tiene claro pues como que no tiene como el mismo prestigio que la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema, a mi modo de ver se siente que le han cercenado una capacidad importante, le cercenan otra que es la capacidad de elegir a los magistrados de los tribunales de manera directa con la creación del Consejo superior, creo que esa es otra pérdida, la Corte Suprema había resentido esa pérdida de 1979, cuando la perdió, la recuperó porque la declaró inconstitucional. Y se cree que se va a fortalecer a la rama judicial con la creación del Consejo Superior de la judicatura, porque se va a tener un gobierno propio en la rama, que va a tener un órgano técnico y un órgano de control disciplinario. Pero ya lo que muestra pues del 91 hacia acá es que ciertamente ese Consejo ha estado en el ojo del huracán sobre todo de la sala disciplinaria por distintas razones. Uno no podría decir que, si uno habla con la gente de la rama judicial, no ha logrado ganar la legitimidad que en su momento se creía que podía tener un aparato

judicial, una estructura institucional que le garantizaba independencia y fortaleza a la rama judicial. Hay que decir que para la época en que se crea el Consejo Superior acá, ya existen consejos superiores de la magistratura en otros países y no gozan del mismo, es decir, prestigio no es una nota característica de esos órganos en otros países, pero en Colombia en ese momento a pesar de que no eran tan prestigiosos, se incorpora como una forma de mejorar lo que llaman ahora la gobernanza de la rama judicial. Y queda ahí el ministerio de justicia como un poquito invertebrado, únicamente manejando cárceles y manejando la política legislativa y pierde digamos en parte la, se convierte en, digamos en las nuevas funciones es tener interlocución con la rama judicial y con el Congreso, pero ya es una estatura diferente. Y luego con la fusión con el Ministerio del Interior, que los expertos dicen que sin duda es una pérdida importante de la capacidad institucional, que luego se recupera. Entonces realmente, institucionalmente sí resultan fortalecidas, largos periodos de los magistrados en las altas cortes en ocho años pues, acaba con la cooptación. Algunos dicen que eso les restó independencia a la rama, otros señalan que poner a la Corte constitucional a que la elija el Senado, a pesar del origen de las ternas, pues supone también una cercanía con la política que no es conveniente, pero pues está otro argumento importante y es la necesidad de la legitimidad política de un órgano de control constitucional, desde algunas perspectivas teóricas. Y pues si uno puede ver, coincidente en parte con la Constitución del 91, un poquito antes ya había empezado un mejoramiento de los salarios de los jueces y magistrados. El cambio a tal punto que uno podía decir que hoy por hoy es la rama en su conjunto mejor remunerada de todas. Claro, el Congreso está bien remunerado, pero son poquitos; pero la rama judicial, el número de magistrados y de, uno se pregunta en el Estado cuántas personas reciben salarios superiores a los 10 millones de pesos pues le aparece uno de los viceministros, si acaso, pero acá son salarios de, eso es un salario, digamos, si uno revisa los jueces municipales, los de circuito, pero mucho más los magistrados del tribunal superior, en los años 80 y 70 estuvieron lejísimos de esos salarios, lejísimos. Realmente hay una transformación en los ingresos salariales transformadora en los 90, que va de la mano con la idea de fortalecer la rama, también mejorar los salarios, etcétera, sí hay un fortalecimiento ahí. ¿Qué tanto? ¿Qué tan suficiente? Pues ahí vemos que no.

ENT 1: ¿O qué tan funcional? No, también.

TEST: Exacto, qué tanto había que poner los recursos ahí donde hay que ponerlos. Y cooperación internacional. Si uno revisa hay un trabajo de maestría que hizo un estudiante de los INSTITUCIÓN EDUCATIVA 4, yo lo conozco, muy juicioso (yo no sé si se volvió libro, pero yo tengo esa tesis por ahí, la leí), que demuestra, eso es como del 2013 por ahí. Hizo un registro de toda la cooperación internacional en materia de justicia que se ha hecho en Colombia y entonces los datos son



impresionantes: lo que ha invertido la Agencia Española de Cooperación, porque esto pasa no solo la inversión que se hace en reforma de códigos, del mejoramiento de la capacidad institucional, entendiéndose rama como carrera judicial, tecnología, en fin, los recursos que se le han invertido al mejoramiento de la rama son importante y no solamente son recursos del Estado colombiano. Pero eso es una discusión pues muy profunda, las necesidades de justicia son grandísimas. Entonces es difícil como, yo me atrevería a decir que el problema más grave que tiene el Estado colombiano hoy, o sea que la rama que está realmente con una necesidad no de reforma, sino de fortalecimiento, porque uno hablar de reforma, inmediatamente se imagina que es que hay crear una nueva corte, pero de inversión es la rama judicial. Pero no es nuevo, existe, es una discusión de los 90, de los 80, de los 70, de los 60, de los 50, de los 40, solo que en esa época el país era muy pobre, entonces en los 40 ¿quién pensaba en inyectarle dinero a la rama? Simplemente decían "ojalá que no sean políticos" [golpea las palmas de sus manos], pero nadie hablaba de eficiencia, ni de mapa judicial, ni de indicadores, ni de cuáles eran las demandas de justicia; si los juzgados y jueces tienen que estar donde hay una necesidad, tienen que estar en la capital pa que estén cómodos. Eso no, yo diría ahí que una de las contribuciones más importantes también de la forma que trajo todo esto, es la creación de la Escuela judicial Lara Bonilla. Creo que el trabajo que ha hecho la escuela fortaleciendo, capacitando pues y desactualizando es realmente ejemplar en América Latina y así pues lo he leído yo en varios, lo he escuchado por expertos. Eso creo que es un avance enorme que ha ayudado a cambiar la mentalidad de los jueces, que ha ayudado a cambiar también la interpretación, o mejor, la adjudicación, uno ve una mejora sustantiva porque en el pasado decía el SIAT: "son políticos, no tienen capacidad". Prácticamente a la rama judicial en muchos casos llegaban los que no encontraban puesto en otro lado. Eso era un sitio en donde realmente el grueso de la rama judicial estaba compuesta por personas que no habían sido capacitadas, digamos, la gente tiene la imagen de la Corte Suprema, pero es que esa no era la rama judicial. La rama judicial eran los jueces que estaban en las poblaciones, con muy pocos recursos, a veces sin siquiera acceso a libros, sin posibilidad de actualizarse ni nada, se graduaban y ni siquiera les llegaba la jurisprudencia, ni siquiera le tenían acceso a una gaceta judicial.

ENT 1: Y asediados por la violencia.

TEST: Por la violencia y con padrino político atrás, de manera que esto también es de, a veces se olvida que la historia política y la historia del conflicto pasa por, así como la Policía es como uno de los primeros eslabones para entender el problema del orden público, también la capacidad de ejercer, aquí no hemos hablado nada de la justicia civil. Pero la justicia civil en términos de propiedad, de titulación, ahora en este inicio de nuestros acuerdos también ha salido a la luz pública los problemas de titulación que teníamos tan grandes, los problemas de tierras, la posibilidad de la justicia civil de

imponer la jurisdicción, los territorios ocupados por grupos armados ilegales, eso es otra, también otra dimensión del problema. O por ejemplo, otra forma de medir la responsabilidad del Estado es precisamente, en los fallos de responsabilidad del Estado en estos últimos años. Si uno hace una revisión muy rápida, por ejemplo, ¿quiénes son los más condenados? Entonces siempre salen los indicadores: fuerzas armadas, fuerzas militares y de policías. Y entonces uno va con detalle, algunos, ahí por ejemplo uno puede tener unos indicadores importantísimos de los factores que llevaron cierto momento a que fuera más condenado el ministerio de defensa, fuerzas armadas, militares y de policía. Uno encuentra patrones, seguramente encontrará patrones, por ejemplo, en su momento eran las tomas a los cuarteles de la Policía en las poblaciones, que traía consigo el juicio de las personas que estaban alrededor. A veces los excesos de la misma fuerza pública, los operativos militares fallidos, por pérdida de personas, las omisiones por parte de la fuerza pública, eso ahí es que finalmente generaron una condena patrimonial para el Estado, una responsabilidad. Esa es otra jurisdicción que también es, sirve para tomarle el pulso al conflicto, ¿no?

ENT 1: No y lo interesante es que esto permite ver que uno no puede centrarse la mirada en una sola cosa o en un solo órgano, porque en realidad están todos. Bueno, viniendo un poco de ese elemento ya de impunidad, queremos traer otro elemento, otra pregunta ligada al tema del 91 de las transformaciones con el 91 y es el cambio que sufrió todo el tema de fuero penal militar. Que pues se transforma, bueno cambia, pero la pregunta va centrada a si, a esos aprendizajes de la jurisprudencia y la corte constitucional, frente a ese elemento del fuero penal militar, que de alguna u otra forma pues había marcado el pasado y que se buscaba que cambiara después del 91 y que asumiera pues con la justicia penal militar otra dinámica.

TEST: Bueno yo no soy experto en fuero penal militar, pero, de hecho, yo quisiera recomendarte unos trabajos que ha hecho un colega que acá dice, es un colega nuestro que se llama CONOCIDO 4, te los puedo pasar, sobre el fuero penal desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte constitucional.

ENT 1: Magnífico, TEST, tenemos un vacío grande en ese punto.

TEST: Y de hecho él creo que podría ser un, podrías conversar con él en un momento dado, porque conoce mucho del conflicto armado, tiene mucho trabajo, él es penalista, pero conoce muy bien el funcionamiento de la justicia penal militar y ha hecho pues trabajo académico sobre el tema. Pero por lo pronto te puedo sugerir los trabajos sobre fuero penal militar, CONOCIDO 4 se llama el profesor. Pero hay un trabajo también, incluso está en inglés, pero es de un profesor que se llama CONOCIDO 5 y es un profesor mexicano. Él tiene un trabajo sobre fuerzas armadas y cortes constitucionales en América Latina y uno de los capítulos sobre Colombia. Y allí muestra él la trayectoria, la relación entre un trabajo de Ciencia Política y derecho constitucional que

muestra también hay una combinación en cómo el contexto político, un poco las dinámicas del conflicto armado, en el caso colombiano, una país con un alto conflicto armado, pero a diferencia de Ecuador y de otros países sin conflicto armado, fue mutando la manera como los jueces entendieron el papel y los límites que se debía dar al fuero militar. Es decir, hasta dónde podría uno darle licencia a la fuerza pública para enfrentar el conflicto armado como punto de partida que tiene que respetar los derechos humanos, ese es un buen trabajo. Pero es un buen punto además el que planteas, que pasamos de una justicia militar a un debate constitucional sobre el fuero militar. O sea, un debate sobre las actuaciones del servicio y no del servicio, ya no de la justicia penal militar, que precisamente lo que hizo fue poner a los civiles a órdenes de una justicia que había sido creada para juzgar solo a personal militar. Entonces no conozco con detalle la jurisprudencia, pero me parece que los trabajos de CONOCIDO 4 pueden ser de utilidad y también pueden ser de utilidad el trabajo de CONOCIDO 5. Yo no estoy seguro si él publicó en español, pero voy a revisar. Yo tengo contacto con él porque lo hemos invitado acá a

-----

ENT 1: Ah, ¡qué bien!

TEST: Yo tengo contacto con él y voy a preguntarle si él tiene ese libro en versión en español o en pdf.

ENT 1: Porque además es un tema que, digamos en la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 hemos tenido bastante tensión porque una cosa es hablar de la justicia penal militar y todo lo que implicó y obviamente estar haciendo un ejercicio muy fuerte en consejos verbales de guerra para mirar toda la aplicabilidad y lo que pasó, digamos durante los consejos. Pero del 91 para acá este tema de los fueros ha sido también como de discusión y obviamente para poder entenderlo. Digamos ahí se está haciendo trabajo con algunos materiales del Ministerio de defensa, pero bueno, pues obviamente hay que mirar todas las aristas en este punto. Bueno profe, hay algo que sumercé me dijo en un momento que me pareció muy interesante, en una de las conversaciones que tuvimos y fue este papel de los abogados defensores de derechos humanos, de los penalistas, que usted me decía que eran más importantes que los constitucionalistas o que primero estuvieron los penalistas. Entoes me gustaría que esa fuera como la pregunta digamos de cierre antes de que hablemos ya de los aportes o conclusiones que sumercé me pueda dar como experto frente a no-repetición. Entoes como que cerráramos todo este tema grande que hemos visto de todo lo de las cortes, cerráramos en uno de los actores, porque yo creo que es de los más importantes para activar la justicia que son los defensores de derechos humanos y esos abogados penalistas.

ENT 1: Sin duda. Aquí acabo de compartirte el trabajo que te decía sobre el fuero penal militar, ahí está el enlace y ahí pueden seguir buscando más cosas de él. Hay un libro de CONOCIDO 6, que yo conozco pues desde que se estaba elaborando y que publicó Tirant lo Blanch en esta colección que

te digo, ya se me fue el nombre. Yo creo que lo tengo en la oficina, es algo así como "-----", que es contando los distintos discursos sobre los derechos humanos que tanto gente que optó por las armas, como la propia institucionalidad planteó sobre todo desde el Estatuto de seguridad, como del 77 al 84, se me fue el nombre del libro. Y él ahí pues hace un trabajo mucho más juicioso de este discurso de los derechos humanos, pero él ahí tiene un argumento y es que el discurso de los derechos humanos surge antes del 78, antes, habla de este libro blanco de los derechos humanos en los 70. Pero lo que uno puede entender es esto: no son los constitucionalistas en su momento; sino sobre todo los penalistas los que quieren impulsar la idea de que hay que defender los derechos humanos y está ligado, aunque ellos son los que defienden a los llamados presos políticos, son entonces los que tienen que enfrentar y citar a los detenidos en las guarniciones militares, en los cuarteles, muchas veces no los dejan entrar, les toca entrar a enfrentar con sus clientes las torturas, ¿no? Es decir, ver cómo han torturado y en algunos casos se denuncian persecuciones. Y algunos de estos defensores de derechos humanos luego terminan militando en la política o no es claro si militan en la política, además, lo hacen, por ejemplo yo tengo el caso de gente que ----- en los años 70. Algunos de ellos no solamente defienden a los, digamos que están siendo procesados por la justicia penal militar, como el famoso juicio del siglo que se llevó a cabo contra Álvaro Fallad, contra todo ese grupo grande que les aplican el Estatuto de seguridad. Algunos de ellos son abogados de estas personas, pero al mismo tiempo, no solamente están en los procesos de justicia penal militar; sino que están demandando los decretos de Estado de sitio junto a otros abogados. Por ejemplo, aparece en los 70 una demanda de estas contra el Estatuto de seguridad, creo que es, que la firma CONOCIDO 7, el abogado penalista CONOCIDO 7 y al mismo tiempo están defensores de derechos humanos de estas personas. Entonces claro, ellos viven en el terreno, lo que significa la aplicación del Estatuto, la violación de las garantías procesales, pero no solo eso, sino las torturas, los vejámenes a que son sometidos sus clientes y en algunos casos también persiguen a estos abogados, también los persigue la, no se sabe pues quién. Estos abogados de derechos humanos entonces son los que empiezan, por ejemplo, no es gratuito que el magistrado CONOCIDO 8 haya hecho parte del foro por la defensa de los derechos humanos, que se reúne junto con Luis Carlos Galán y otros actores en 1980, 79, 80, para enfrentarse ante el Estatuto de seguridad y denunciar que aquí se están violando derechos humanos de manera masiva. Por ejemplo, la revista Alternativa es una de las principales fuentes de publicaciones en ese momento, ellos son los que empiezan a publicar las fotos de las torturas, los testimonios de los excesos del Estatuto de seguridad y entrevistan abogados penalistas. Por ejemplo en la Corte Suprema de justicia, José María Velasco es un magistrado nariñense, que ha sido gobernador de Nariño, gobernador nombrado en tiempos de Rojas Pinilla, conservador y llega a

ser magistrado de la Corte Suprema y es uno de quienes salva el voto en el Estatuto de seguridad y es uno de los que más fuerte fustiga, más fuerte critica el Estatuto como magistrado, se enfrenta a Turbay directamente y luego sale de la Corte Suprema, es el magistrado ponente que declara inconstitucional la reforma constitucional y luego sale de allí y es abogado de algunos de los guerrilleros del M-19. Y después en el 91 es constituyente por la alianza democrática, muy conocido el doctor Velasco, pero él es penalista, entonces probablemente termine defendiendo a los guerrilleros del M-19 en el 83, 84, porque todavía antes, después de salir de la Corte, pues porque ha visto todo lo que ha visto, ya ha entendido las dinámicas del conflicto, etcétera. Pero hay otros casos, por ejemplo, en lo territorial uno puede empezar a ver que hay algunos abogados penalistas que empiezan, que incluso son, algunos empiezan a militar en la izquierda y otros son como calificados como de izquierda, por su cercanía, precisamente con estos... probablemente entran en simpatía con esos sectores políticos, después de ver los excesos de algunos agentes del Estado en contra de ellos, entoes terminan como en esa simpatía con esa militancia política. Pero realmente eso es algo que está por estudiar: el papel de los penalistas. Yo tengo por ejemplo grabado en la cabeza una revisión de prensa del 78, 79, en donde un grupo de abogados penalistas que se me va el nombre ahora...es que no tengo acá ningún libro. Es un grupo de abogados penalistas que no son los mismos de Foro por los derechos humanos, Abogados penalistas por los derechos, bueno, alguna cosa así. Y ellos, creo que están encabezados por Cipagauta si no estoy mal, creo que Cipagauta Galvis, a él lo mataron, le hicieron un atentado después. Este abogado (creo que es él) le pide una audiencia a Turbay y al ministro, creo que es el de justicia, y va con otra persona, con uno de sus defendidos, sus clientes que acababa de ser liberado, alguna guarnición. Yo creo que es el ministro de gobierno, me parece que es ese, hacía eso. Y entoes este abogado entra a pedir la cita con Turbay, Turbay los va a recibir y este señor de un momento a otro se quita la camisa, se quita la ropa delante de Turbay y delante del ministro y les muestra las señales de tortura. Entonces claro, eso al otro día sale en la prensa, diciendo "si no nos cree, como venimos diciendo que aquí se tortura gente, mire esto". Claro, Turbay propone que se va a hacer una, o sea, que se haga una investigación exhaustiva por la vía y demás, pero este es un hecho como de, digamos de generar ese impacto, creo que se quita la camisa, no sé, eso fue bastante difundido como en los titulares, ¿no?

ENT 1: ¿Eso fue en el 78, 79?

TEST: Sí, eso está en un artículo que te digo, que se llama, a ver si yo tuviera por aquí algo en word, que se llama "El Estatuto de seguridad o uno de los peores casos en la historia de la Corte Suprema de justicia" yo le puse así ese título a este capítulo que está en ese libro. A ver si tengo por aquí alguna evidencia... Como te digo, si tengo algo por aquí, ese Word, a ver si tengo algún borrador y como para darte como la cita más.

ENT 1: El profe me acordó con esto del M-19 y quienes terminando militando en la izquierda el caso de Matallana, ¿no? Revisando Matallana termino con el M-19 ahí en los estados de [risas], cuando las votaciones con el M, ¿no? Es algo que históricamente lo pone a uno a pensar: ¿este país cómo funciona?

TEST: Sí, y fíjate, por ejemplo, el magistrado Velasco, a las pocas horas de conocer las palabras de Turbay dijo públicamente, ah bueno, ¿qué dice Turbay? Dice que "sea la oportunidad de expresar como jefe de Estado mi inconformidad contra funcionarios del poder judicial que se han vuelto polemistas y opinan contra los altos del gobierno". Entoes Velasco le dice "una cosa es disentir del voto mayoritario de la Corte, que es el caso mío y otra contestar el motín. La actitud de los magistrados que salvamos el voto no significa incurrir en actividad política, porque nosotros somos parte del gobierno". Es que además ordena que lo investiguen a Velasco, por haber votado.

ENT 1: Por haber hecho el salvamento de voto.

TEST: Sí, sí, sí. Ese lo tengo aquí y entonces, a ver si, recién todas las violaciones de derechos humanos, creo que ese está por aquí.

ENT 1: Es que esto es lo interesante de esa reconstrucción histórica son todos esos detalles que permiten realmente explicar lo que pasó.

TEST: Así es. Esta... deme un segundito... Aquí es donde está toda esa parte que dice Turbay: "yo soy el primer secuestrado en este país" cuando le dicen que hay gente que está desaparecida. Debe estar por aquí.

[Silencio mientras busca 55:52-56:08] Bueno, aquí está lo de García Márquez que crea esa fundación que se llama Habeas por los derechos humanos. Incluso hay un caso de unos muchachos que los desaparecen, que los desaparecen no; se los llevan y les hacen una cantidad de torturas, estudiantes de la Nacional. Y el médico, el director de Medicina Legal, dice que hay evidencia de violencia externa, son 50 estudiantes, 78. Y después de dar esas declaraciones, destituyen a este médico de Medicina legal por haber dicho que había claras señales de tortura en este grupo de estudiantes, porque el ejército decía que no había pasado nada, entonces de ese tamaño era la tensión y poder que tenía la fuerza pública en ese momento, de neutralizar cualquier investigación. No encontré el dato que te decía de esto, pero, a ver si yo lo pudiera tener.

ENT 1: Y todos los documentos, profe, que de pronto sumercé tenga, encuentre, que usted piense "uy, esto les van a servir" aquí los recibimos, ¡bienvenidos! ¡Bien recibidos! [risas]

TEST: Mírelo aquí está, aquí está la Asociación de abogados democráticos, fíjate, el ---- de 1979, creo que eran audiencia con Turbay, con el ministro Zea Hernández. Estaba el senador Humberto Priales, otro que era de la ANAPO. Los abogados Enrique Cipagauta, Humberto Oviedo, Jorge Arenas, Miguel Cano, Carlos Moreno, Jorge Sánchez y el jurista y mayor retirado del ejército Aurelio Caicedo, creo que él es payanés, suena.

ENT 1: ¿Qué día exacto? ¿Qué día fue, profe?

TEST: En efecto es en, el dato lo encuentras en la revista Alternativa No. 197 la encontré yo. Esto es el ---- del 79.

ENT 1: Del 79, listo.

TEST: Fíjate lo que pasa que dice "por cerca de una hora y media hicieron las denuncias sobre los excesos de la fuerza pública, que incluían violencia física y psicológica contra los detenidos, torturas, detenciones que superaban los cinco meses sin que se conocieran cargos, capturas ilegales, manifestaron que sufrían amenazas, hostigamientos, por parte de los militares, así como bloqueos para ejercer la defensa de sus apoderados detenidos en guarnición, lo que te acabo de decir. El grupo de juristas no solo pidió derogar el Estatuto de seguridad; sino cambios constitucionales incluyendo la salida del ministro de justicia Hugo Escobar Sierra. Turbay aprovechó la visita para pronunciar un discurso bueno larguísimo, él era experto en eso. Y que había que preocuparse por los derechos humanos y también les dijo que ojalá se condenara a los asesinos de muerte, personas como Pardo Vuelvas o a los empresarios secuestrados, ¿no? Este mismo argumento de, así como la guerrilla, así como gente que es cercana a la guerrilla debería hacer respetar los derechos humanos, ojalá que también la guerrilla, que también los abogados de derechos humanos se pronunciaran sobre los asesinatos como el de Pardo Vuelvas y el de los infiltrados contra empresarios, ese es un argumento que suele ser constante, como justificatorio, como retaliatorio, bueno.

ENT 1: Sí, sí, sí.

TEST: Esa cita no corresponde pues al que muestra la evidencia física que te digo de la tortura dice que negó la posibilidad de cambios en funcionarios, yo creo que está en otro trabajo. Aquí está, ¡ya lo encontré! Más adelante el ministro Zea Hernández que también negaba cualquier abuso de la fuerza pública fue sorprendido por imágenes directas de una de las víctimas de las torturas. Una Comisión de la Unión Nacional de Oposición, la UNO, que encabezaba el senador Humberto Prialas y otros líderes de izquierda como Manuel Cepeda, se reunieron con el ministro (fue con el ministro; no con Turbay) para entregarle un documento que contenía informes sobre las torturas, a ellos los acompañaba un joven que parece un abogado, ya que en los mencionados le pidieron que se desnudara y les mostrara las señales claras de haber sido víctima de torturas. Algunos asistentes se trataron con, que había sido detenido en las dependencias de la brigada de Inteligencia militar, sometido a 12 días e interrogatorios con electricidad en los testículos, plantones, apaleadas y vendas. Zea muy sorprendido prometió hablar con el presidente Turbay sobre la situación. Esto está en la revista Alternativa 207-579, del 79. Aquí dice Gustavo Pardo Torres genera abogado de orden detenidos por el caso de la sustracción de armas del Cantón, hizo un juicioso análisis de la inconstitucionalidad del Estatuto de seguridad, citó el caso de órdenes de allanamiento y aprehensión realizada por el BIM, ordenaba capturas sin ninguna

prueba de indicio...

Entoes claro, ahí ya aparecen así, lo que yo te digo fue con el ministro de gobierno, Zea. hubo unos que se reunieron con el presidente y otros con el ministro. Fíjate que lo que uno empieza a ver allí con claridad es la, cómo, hay un litigio estratégico y por decirlo que se haga controlar, a líderes políticos, muchos de ellos abogados también y a defensores de derechos humanos, que más que defensores de derechos humanos son abogados penalistas que defienden a sus clientes y en la defensa de sus clientes encuentran violaciones de derechos humanos por la justicia penal.

ENT 1: Bueno, profe, nos quedan dos minuticos para las...

TEST: Podemos extendernos un poquitico, es que tengo que salir faltando un cuarto para las cuatro, entonces.

ENT 1: Ah bueno, listo profe. Yo soy así como muy medidita con el tiempo [risas]. Ah bueno, porque ahorita pues ya viene entoes la pregunta final que es esa de las recomendaciones. ¿Qué le recomienda usted a la Comisión de la Verdad, pensando en no-repetición? Pensando en todos estos temas constitucionales y bueno y del papel y responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia y bueno, de las altas cortes y pues de todo este ejercicio, no solamente serían las altas cortes, sino es esta rama del poder que es tan importante y que es crucial realmente para conseguir la paz y la justicia.

TEST: Pues yo diría que hay como una preocupación fuerte que ya la mencioné antes y es cómo podemos fortalecer institucionalmente la justicia, es decir, cómo se puede hacer más robusta la administración de justicia, mejorar el acceso a la justicia, creo que mejorando la capacidad de respuesta de toda la rama judicial, podemos avanzar hacia la no-repetición y ir pensando no en las altas cortes; sino en los servicios de justicia. Es decir, la incapacidad del Estado de proveer servicios de justicia pronto, oportunos, eficaces, democratizados, con acceso a la gente en su conjunto y no solo el que tiene los recursos para hacerlo, creo que eso podría ayudar a garantizar la no-repetición, entendida entonces como ajuste estructural o ajustes de alza al sistema de administración de justicia. Y ahí pues entra por fortalecer la independencia, fortalecer la capacidad de los jueces y mejorar el acceso, ese sería yo creo que lo, pues parece como muy corto, pero profundamente importante, complejo. Y yo creo que allí nos vería más a eso y menos a las altas cortes. Creo que la creación de la Corte constitucional es un avance tremendo, importantísimo, me parece que la creación de la JEP también, yo creo que otro aspecto importante es que pueda basar la JEP, se creó todo un sistema de justicia por primera vez en la historia del país. Creo que ese es un avance institucional enorme. Ningún proceso de paz, ningún conflicto lo hemos arreglado logrando que haya una capacidad institucional para enfrentar nuestros acuerdos, esta es la primera vez que se hace eso, entonces apoyar y dejar que funcione esta jurisdicción es central para evitar la no-repetición sin duda, esa es la obvia, pero lo otro es más pensado en el día a día, en la



cotidianidad y en aquello que no pasa por los acuerdos. Y en prevención del evitar que vuelvan a ocurrir las cosas, entendidas como una prevención de nuevos conflictos y de esa forma de lograr la paz y desactivar la violencia.

ENT 1: Perfecto, profe, muchísimas gracias, de verdad que ha sido súper ilustrativo estas dos sesiones. Bueno, todo este material que sumercé nos pueda facilitar también nos interesa, lo mismo si sumercé tiene contactos con este profe, nos pudiera mandar como el contacto nos interesaría mucho fortalecer este tema de justicia penal militar y fuero y de verdad que para nosotros como la Comisión estos aportes son cruciales para los analistas, quienes estamos de una u otra forma mirando tantas cosas al tiempo, pero que además se requieren. O sea, yo creo que esto es una de las apuestas que tiene la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 muy clara y es que no podíamos seguir viendo al Estado de una manera monolítica, sino que teníamos que empezar a ver todas sus instituciones y entenderlo, en cada una.

TEST: No, muchas gracias, yo muy contento de poder conversar contigo de nuevo y por supuesto de poder contribuir a este esclarecimiento y a este ejercicio que están haciendo ustedes que creo que es fundamental para lograr la paz y para avanzar socialmente. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos que podamos hacer desde la academia por garantizar que se cumpla la misión de la mejor manera y es poca realmente.

ENT 1: Muchísimas gracias, profe, se está pensado precisamente en hacer un seminario público sobre estas temáticas y precisamente sobre este tema ligado a la impunidad. Yo le estaría informando porque pues sería interesante si pudiera participar, es una cosa que se va a hacer como grande que la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 ha venido haciendo como diálogos de públicos y yo creo que eso también son como los abrebocas de lo que de una u otra forma son las apuestas de la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 y lo que quiere la ORGANIZACIÓN PÚBLICA 1 pues poner a discusión de la sociedad colombiana. Entonces yo lo estaré molestando de pronto nuevamente, profe [risa].

TEST: Listo, cuenta con eso y si en algún momento quieren que hagamos algo con enlazar institucionalmente, por ejemplo, con el ----, algo acá, bien sea virtual, pues por ahora o presencial, a nosotros nos interesa mucho también poder participar académicamente.

ENT 1: Vale, profe, perfecto. Muchísimas gracias, que pase muy buena tarde, muchas gracias por su tiempo.

TEST: No, a ustedes, feliz tarde.

ENT 1: Vale, que esté muy bien, profe, chao.